

PIDE EMBARGO PREVENTIVO – FORMACION DE INCIDENTE

Señor Juez en lo Civil y Comercial de la 5ª Nominación:

JUICIO: POSSE SILVA JIMENA VS. BANCO DE GALICIA S.A.
S/SUMARÍSIMO (RESIDUAL)-EXPTE. 2548/18

PATRICIO FRÍAS SILVA, por la representación que ejerzo de la actora, en estos autos a V.S. respetuosamente digo:

I.- Habiéndose dictado sentencia, y ejerciendo el derecho que acuerdan el artículo 291 inciso 1 del CPCC, vengo a solicitar se TRABE EMBARGO PREVENTIVO sobre los fondos que el Banco de Galicia tenga depositados o en el futuro deposite en su cuenta existente en el Banco Central de la República Argentina (BCRA); hasta cubrir los montos fijados en la sentencia de fecha 15 de Noviembre del año en curso.

A los fines de la fijación del monto a embargar, acompaño liquidación de intereses devengados hasta el día 31 de Octubre pasado, practicada según las tablas de actualización que confecciona el Colegio de Abogados de Tucumán, aplicándose conforme a lo dispuesto por V.S. la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina. Se adjuntan las liquidaciones digitalizadas.

1.- Capital	\$ 4.945.704,11
2.- Intereses sobre el rubro “pérdida de chance por pérdida de valor de capacidad de compra. Devengados entre el 1/3/2019 y el 31/10/2022. Porcentaje de actualización 173,21 % sobre \$ 111.103.636,00	\$ 1.924.447,19
3.- Intereses sobre el rubro “pérdida de chance por suba de precio de inmueble. Devengados entre el 3/8/2018 y el 31/10/2022. Porcentaje de actualización 204,57 % sobre \$ 1.586.250,00	\$ 3.244.981,80
4.- Intereses devengados sobre el rubro “pérdida de chance por agravamiento de la tasa de interés”.Devengados entre el 3/8/2018 y el 31/10/2022. Porcentaje de de actualización 204,57 % sobre \$ 848.418,00	\$ 1.735.603,45
5.- Daño moral	\$ 400.000,00
6.- Daño punitivo	\$ <u>1.000.000,00</u>
TOTAL:	\$ 11.850.735,70

Al mismo efecto –monto del embargo- deberá V.S. tener presente que la totalidad de las costas le fueron impuestos a la entidad demandada.

II.- Ordenado que sea el embargo, y previa caución juratoria que prestará oportunamente, deberá librarse oficio al Banco Central de la República Argentina para que tome razón de la medida. Una vez retenidos

los fondos, éstos deberán depositarse en una cuenta judicial a nombre de este Juzgado y como perteneciente al juicio del rubro, a abrirse en el Banco Macro, Sucursal Tribunales. En la rogatoria deberá dejarse constancia que el letrado PATRICIO FRÍAS SILVA y/o quién éste indique quedan facultados para diligenciarla.

III.- Solicito que, a los fines de no entorpecer el curso del principal, se forme incidente de embargo a tramitar por cuerda separada, a cuyos fines acompaño digitalización de la sentencia y las correspondientes cédulas de notificación del decisorio que da lugar al pedido de medida cautelar.

Proveer de conformidad

SERÁ JUSTICIA

Patricio Frías Silva
Abogado
M.P. 49333
Fdo. Digitalmente

Se notifica a: **FRIAS SILVA, PATRICIO SEVERO**

Fecha Depósito: **16/11/2022 - 00:00**

Domicilio Digital N°: **20257346545**

Expediente: **2548/18**

Descripción: **SENTENCIA DEFINITIVA**

Unidad Judicial: **JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN V**

Depositado en casillero virtual: **20257346545, 23276816829, 20121610125, 90000000000**

06

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

Juzgado en lo Civil y Comercial Común V

ACTUACIONES N°: 2548/18



H102053886391

JUICIO: POSSE SILVA JIMENA MARIA c/ BANCO GALICIA SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARISIMO (RESIDUAL) - 2548/18 - I.:23/08/2018

San Miguel de Tucumán, 15 de noviembre de 2022.

AUTOS Y VISTO: Para resolver lo solicitado en estos autos caratulados: "POSSE SILVA JIMENA MARIA c/ BANCO GALICIA SOCIEDAD ANONIMA s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)" - 2548/18, de cuyo estudio

RESULTA

1. Escrito de demanda. Que en pág. 311/358, del primer cuerpo del expediente digitalizado, el letrado apoderado de Jimena Posse Silva inicia la presente acción de consumo en contra de la firma Banco Galicia y Buenos Aires S.A. a fin de que se condene a la demandada a indemnizar por daños y perjuicios a su mandante, por la suma total de \$7.856.938,52, que detalla más adelante.

Relata que, el 17 julio del 2017, la Sra. Posse Silva decidió iniciar los trámites para acceder a un crédito hipotecario para la compra de una vivienda propia en el Banco de la Nación Argentina.

Continúa expresando que, las líneas de crédito entonces vigentes (UVA), teniendo en cuenta los ingresos de la actora como funcionaria jerárquica planta permanente de la ANSES, le permitían obtener un préstamo de suficiente importancia para procurarse una casa o departamento, contra el pago de una cuota similar a la de un alquiler.

Menciona que su poderdante se entusiasmó con la idea al conocer muchas personas que, en su situación, habían obtenido los préstamos que facilitaban el acceso a créditos hipotecarios a un sector que, hasta entonces, se había visto relegado puesto que tenían ingresos demasiado altos para un crédito subsidiado, como el procrear, y demasiado bajos para acceder a cualquier crédito hipotecario en plaza anterior a los UVA. Así, creyó haber encontrado la forma de procurarse por fin un techo propio para ella y su hija menor, Justina Asfoura, a quien crió sola desde su nacimiento (05/10/2004).

Sin embargo, expresa que, al iniciar los trámites de solicitud del préstamo en el Banco Nación, se le informó que podría tener dificultades para acceder al crédito hipotecario, ya que se encontraba en las

bases de datos de calificación de usuarios del sistema financiero del Banco Central de la República Argentina y del Veraz Risk como deudora nivel 5 (irrecuperable según los parámetros del BCRA). Señala que a partir de allí comenzó, para su conferente, un verdadero calvario y, como nunca había debido nada a quien figuraba en el Banco Central, se avocó a averiguar el porqué de tales descalificaciones y a obtener la rectificación de la misma; lo que ulteriormente sería inútil puesto que su posibilidad de obtener el crédito que tramitaba se frustró definitivamente.

Continúa exponiendo que cuando consultó en la base de datos del BCRA y del Veraz, su mandante descubrió que figuraba como deudora en situación 5 del Fideicomiso Financiero Privado Frankel (que es un fideicomiso cuyo fiduciante es el propio banco demandado), en el período 5/17 por la suma de \$6.700.

Comenta que, ante dicho hallazgo, en fecha 19/07/2017, remitió carta documento al Fideicomiso Frankel intimando a la inmediata rectificación de la errónea información, y haciéndole saber que le estaba impidiendo el acceso al crédito como consecuencia de su accionar.

Afirma que el 25/07/2017 su mandante recibió el acuse de recibo de la solicitud del crédito (realizada en la página web del banco), por medio de un correo electrónico del Banco Nación, en el que además se le informaba que se había iniciado el proceso de alta de la solicitud de un préstamo hipotecario. Empero, el mismo día recibió otro correo electrónico de dicho banco donde se le informaba a la actora que la solicitud iniciada no podría continuarsu curso con motivo de registrarse deudas con atraso en los últimos 12 meses (situación 5) conforme informes del BCRA y Veraz.

Expone que, ante dicha respuesta el mismo día que recibió el mail del Banco Nación, la accionante solicitó un nuevo informe del Veraz en que constató que la falsa información del Fideicomiso Frankel había sido eliminada, como consecuencia de la carta documento remitida; pero que no había ocurrido lo mismo con la central de información on-line del BCRA, donde se mantenía la calificación 5 (deudor irrecuperable) por la suma de \$6.700 con acreedor el Fideicomiso Frankel. A su vez, afirma que en el Veraz figuraba otra información errónea pero brindada por el Banco de Galicia, registrando a su mandante como deudora de dicha institución crediticia por descubiertos en cuenta corriente con un exceso de \$5.793 y otro saldo adicional de \$333.

Por todo lo antes expuesto, asevera que, encontrándose próximo el vencimiento de alquiler de la vivienda que aún hoy ocupa su poderdante, debió iniciar un amparo informativo en contra del Fideicomiso, a los fines de lograr el crédito antes mencionado. Así, el 31/07/2017 su mandante inició, ante el Juzgado Federal N° 1, el juicio caratulado "POSSE SILVA, JIMENA MARIA C/ FF PRIVADO FRANKEL - COMAFI FIDUCIARIO FINANCIERO SA Y OTRO S/ HABEAS DATA" Expte. N° 24336/2017, y en el marco de dicho proceso se dictó una medida cautelar el 10/08/2017 en virtud de la cual el 25/08/2017, el Banco Central dejó de registrar la información sobre la actora brindada por el Fideicomiso Frankel.

Paralelamente, continúa exponiendo que, la actora concurrió al banco Galicia para reclamar por la información que figuraba sobre ella por un supuesto descubierto en cuenta corriente donde, luego de comunicar la urgencia de su situación, un representante del banco demandado dejó constancia por escrito (en fecha 18/07/2017) de que su mandante no poseía productos activos ni deuda alguna con la institución. Además, el 02/08/2017 remitió una carta documento al Banco Galicia intimándolo a que, existiendo el riesgo cierto de que la falsa información frustre su acceso al crédito hipotecario, rectifique en forma inmediata la información que elevó sobre la actora. Finalmente, en agosto del 2017 dicha falta fue corregida conforme informe de Veraz del 29/08/2017.

Inclusive explica, respecto de esto último que, pese a que su mandante nunca fue cliente del banco demandado, la accionada inventó un crédito en su contra, cuyo pago nunca había sido reclamado, que dio lugar a su calificación como deudora irrecuperable, y posteriormente cedió a un fideicomiso constituido por la misma entidad demandada, para dificultar de una manera dolosa la rectificación de la falsa información crediticia de la actora, a través de una segunda cesión del mismo crédito, derivando en la pérdida del crédito hipotecario que infructuosamente gestionó durante más de un año.

Aclarado lo anterior, señala que, una vez corregida la información crediticia en ambas bases de deudores previamente referenciadas, el 25/08/2017 su mandante efectuó, por segunda vez, la solicitud de crédito hipotecario al Banco Nación vía web, y oportunamente concurrió a la mencionada entidad, con la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder al préstamo.

Así, enuncia que, el 14/09/2017 el Banco Nación le otorgó a su mandante el preacuerdo por un crédito hipotecario de \$1.950.000 amortizable en 360 cuotas mensuales, con un interés del 3,5% anual, ajustable según el índice UVA; y conforme los términos del mencionado preacuerdo, la actora debía conseguir el inmueble a comprar para someterlo a un estudio de título y concretar la operación en sesenta días. En consecuencia, afirma que la Sra. Posse Silva, consiguió una propiedad ideal para sus necesidades, ubicada en la calle Lamadrid N° 308, identificada como Unidad Funcional N° 6, y que encargó el estudio del título de la misma a la Escribana María Carolina Di Caro; dicho estudio se confeccionó el 06/10/2017 y se agregó a los antecedentes del crédito en trámite.

Mientras tanto, manifiesta que, en el juicio de amparo informativo previamente mencionado, al contestar demanda el Fideicomiso Frankel, explicó que el crédito cuyo atraso informaba había sido adquirido nuevamente por el Banco Galicia, es decir que el mismo había vuelto a ser acreedor de la actora. Asimismo, denuncia que, mediante informe de la central de deudores del BCRA, su instituyente descubrió que figuraba en situación 5, pero informado esta vez por el banco demandado en octubre del 2017, es decir, dicha denuncia la realizó después de que la actora efectuó los reclamos personalmente ante dicho banco (en julio del 2017) para lograr la supresión sobre el descubierto en cuenta corriente, conforme se mencionó ut supra.

Por todo lo antes relatado, revela que su mandante preveía que si la información persistía le rechazarían el crédito preacordado, lo que ocurrió el 22/12/2017, siendo notificada por email por el Banco Nación que su crédito, efectivamente, había sido rechazado por registrar atrasos en situación morosa.

Hace hincapié en que la situación del mercado inmobiliario en aquel entonces era más óptima, impulsada por el fuerte envión dado por los créditos hipotecarios, como el que su mandante pretendía acceder y fue frustrado por el doloso actuar del banco demandado.

Continuando con su exposición, el letrado apoderado de la actora cuenta que, luego de confirmado el rechazo del crédito por parte del Banco Nación, por culpa del accionar del Banco demandado, su mandante le intimó, por nota de fecha 03/01/2018, la inmediata rectificación de la falsa información que nuevamente el Galiciacomunicaba a las centrales de información crediticia. El banco accionado contestó por mail que se encontraba gestionando el reclamo, identificado en enero con el N° 0024699144 y en marzo con el N° 0028310692.

Ante esa situación, declara que no hubo otra alternativa que iniciar el amparo informativo contra el Banco Galicia en fecha 14/02/2018, proceso que tramitó ante el Juzgado del Fuero de la IIª Nominación, siendo caratulado como "POSSE JIMENA MARIA C/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA S/ AMPARO INFORMATIVO" Expte. N° 131/18; donde, por sentencia del 29/06/2018 se hizo lugar al habeas data, decisorio que no fue recurrido por la demandada y mediante oficio cursado al BCRA se dio cumplimiento con la resolución de fondo, recién en julio del 2018.

Ahora bien, enuncia que luego de los dos rounds judiciales antes descriptos, en virtud de los cuales se rectificó íntegra y retroactivamente la falsa información sobre su mandante, la misma presentó una nueva solicitud ante el Banco Nación para conseguir al fin su ansiado crédito.

Entonces, realizadas las constataciones de rigor y presentados los informes correspondientes el Banco Nación dictó un nuevo preacuerdo el día 03/08/2018, pero el monto del crédito y sus condiciones habían cambiado, es decir el monto acordado era de \$1.600.000 a una tasa de interés del 6,50% anual, en un plazo de 360 meses, con un sistema de reajuste UVA.

Sigue expresando que, el país se había sumergido en una crisis cambiaria, financiera y económica (según expresa desde el 28/12/2017), y que con el dinero del nuevo préstamo no alcanzaba para acceder a una vivienda como la que habría podido adquirir si no hubiera mediado la dolosa conducta del banco accionado. Además, recuerda que el dólar se desbocó (saltando de \$18 a \$40), que la inflación del 15% estimada para el año 2018 por el equipo económico del gobierno terminó entre el 42% y el 45%. También revela que, el valor de los inmuebles saltó a las nubes, más aún teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario está históricamente atado al dólar. Así, explica que, un departamento como el que pretendió comprar su clienta con el crédito de \$1.950.000 costaba \$2.450.000 (U\$D141.000) y con el crédito se cubría un 83% del precio (U\$D117.000) y, revela, que su mandante tenía ahorros suficientes para pagar el saldo acordado con el vendedor, es decir, alrededor de \$400.000 equivalentes a U\$D24.000, inclusive tenía la posibilidad de vender su auto (Toyota Ethios) en caso de ser necesario para integrar la diferencia. Sin embargo, reflexiona que los ahorros de la actora quedaron licuados por la disparada del dólar, siendo que con los \$400.000 que tiene ahorrados más los intereses ganados apenas le alcanza para comprar U\$D12.500.

Continúa su razonamiento, expresando que, el Banco Nación para septiembre de 2017 le prestaba el equivalente a U\$D141.000, mientras que un año después, en julio del 2018 y con un dólar a \$40, el mencionado banco le prestaba solamente la suma de \$1.600.000, correspondiente a U\$D40.000; es decir, que con el nuevo crédito le alcanzaba para cubrir el 28% del precio del departamento que sigue costando lo mismo en dólares. Para completar el cuadro, advierte que, los haberes de su mandante crecieron en un 26% mientras que el dólar aumento en un 135%, más una inflación que superó el 40%.

Por su parte, entiende que los bancos utilizan determinados mecanismos para cobrar créditos inventados o para recaudar ítems impiadosamente inflados. Así menciona que los bancos abren una cuenta corriente al descubierto y en la misma se debitan intereses, gastos de emisión y administración, comisiones, sellados seguros de vida IVA etc., que el “cliente” no cuantifica, cuando realmente usó la tarjeta, o como en el caso de su mandante, que ignoraba la existencia de la tarjeta, la cuenta y la deuda. Sigue exponiendo que, cuando la cuenta llega al límite del descubierto “otorgado”, la entidad financiera comunica al BCRA el atraso de la cuenta que genera como efecto la descalificación crediticia del supuesto deudor, en el caso de la actora nivel 5, es decir, incobrable. Y como corolario, detalla que dichas deudas “incobrables” se incluyen en un fideicomiso cuya administración se encarga a especialistas en cobranzas vergonzantes para que los “morosos” paguen lo que en verdad no deben, mientras que se negocia en el mercado esos paquetes compuestos por créditos “basura”. Afirma que, en el caso de la accionante, cuando se requirió judicialmente la corrección de la falsa información, el crédito vuelve al cedente originario, es decir, al Banco demandado, al parecer como un sistema para ahorrar costas.

Destaca que, conforme publicación del BCRA (cuyo link de la página web transcribe) el fiduciante del Fideicomiso Frankel es el Banco de Galicia y Buenos Aires, y que, mediante este mecanismo, antes descripto, los afectados a veces se ven obligados a pagar lo que no deben para no verse convertidos en leprosos crediticios y así optimizar sus ingresos.

Sostiene que resulta indudable la calidad de consumidor (involuntario) de su mandante, ya que fue introducido en el ruedo de la descalificación crediticia por decisión exclusiva del Banco Galicia.

1.2 En relación a los daños y perjuicios reclamados, detalla los siguientes rubros:

Pérdida de chances: Expresa que el daño está representado por la imposibilidad de la actora de comprar, a través de un crédito hipotecario, la vivienda propia a la que aspiraba con derecho y posibilidades irrepetibles y convertirse en propietaria. Es decir, se vio frustrada su posibilidad de comprar el departamento con una cuota prácticamente equivalente al alquiler mensual que actualmente paga y que tendrá que pagar para siempre, cuando podría haber destinado su sueldo mensual en la amortización del crédito hipotecario frustrado. Considera que, en este caso, la pérdida de chance no es hipotética sino actual, permanente, manifiesta y total.

Para determinar la cuantía de este rubro, explica que el perjuicio sufrido por su cliente comprende tres partes:

a) Pérdida de valor de capacidad de compra del crédito frustrado respecto de la nueva calificación: Manifiesta que el daño producido se valúa en la cantidad de 33.780,37 UVAs (Unidades de valor adquisitivo) o su equivalente en pesos al momento efectivo del resarcimiento a su mandante. Para llegar a ese monto, explica que si se toma el valor del crédito aprobado mediante resolución de Banco Nación de fecha 14/09/2017, se obtiene la suma de \$1.950.000, o mejor dicho 97.500 UVAs, resultando este último el poder de compra del crédito en aquel momento, conforme la valuación del Banco Central de la República Argentina (según cotización de AR\$20/UVAs). Ahora bien, si se toma el segundo preacuerdo del Banco Nación de fecha 03/08/2018, cuando la cotización de las UVAs era de AR\$25,11, se obtiene un poder de compra del nuevo monto de crédito otorgado, es decir, \$1.600.000, equivalente a 63.719,63 UVAs. Entonces, el valor de compra del crédito ofertado a su mandante se vio disminuido en 33.780,37 UVAs, que es el valor del perjuicio sufrido por la actora y que según cotización del BCRA al 01/03/2019 (AR\$32,89/UVA) se correspondería con la suma de \$1.111.036,36.

b) Suba de precio de los inmuebles por la devaluación del peso argentino: Expresa que el cálculo que antecede es solo parte de la chance perdida, ya que se refiere a la asistencia financiera con la que hubiera contado para hacerse de su vivienda la actora, por lo que no debe perderse de vista, además, la escalada del precio de las viviendas en el mercado inmobiliario debido a la situación macroeconómica del país. Así comenta que el inmueble que se tuvo en vista para comprar y que fue sometido a estudio de título por la escribanía antes mencionada, tenía un precio de USD141.000 o su equivalente en pesos argentinos \$2.425.200 (es decir que contaba con una asistencia crediticia preacordada del 83%), mientras que, en la actualidad su valor asciende a \$5.597.700 en base a la cotización del dólar del Banco Nación, el valor del inmueble al 18/02/2019 (fecha de redacción de la demanda). En consecuencia, considera que la chance de la actora de hacerse de una vivienda está definitivamente perdida, y actualmente le demanda un 130% más que al momento del preacuerdo hipotecario del Banco Nación de fecha 17/09/2017, lo que representa un aumento de \$3.172.500.

c) Agravamiento de la tasa de interés respecto del primer preacuerdo. Sobre este último ítem, asegura que, en el último preacuerdo obtenido, la tasa de interés trepa 3 puntos, por lo que, si se calcula en un simulador de créditos con sistema de amortización francés, se observa que sobre el monto otorgado (\$1.600.000) se aplicaría un sobrecosto extra de interés a pagar de \$841.402,16 a devengar en 360 cuotas.

Concluye que, para una reparación integral de la pérdida de chance sufrida por su conferente, resulta indispensable tener en consideración los tres parámetros antes detallados, por lo que corresponde que se le compense la suma total de \$5.124.938,52, monto calculado al 18/03/2018 Asimismo, y sin perjuicio de que considera más preciso el procedimiento propuesto para calcular el monto del perjuicio sufrido, añade que para mejor ilustración, un alquiler a treinta años (360 meses) suma la cantidad de \$4.253.320, ello sin contar con costos adicionales, comisiones inmobiliarias y demás gastos eventuales.

Daño directo: Manifiesta que, a los fines de corregir la información crediticia de su cliente, se debieron iniciar dos amparos informativos, por lo que la actora debió abonar los servicios profesionales de su abogado por \$32.000, monto que reclama en este concepto.

Daño moral: Afirma que su conferente transitó un verdadero calvario y durante un año se pasó efectuando reclamos y denuncias en el banco accionado, remitiendo mails y cartas documentos y hasta debió iniciar dos amparos informativos con toda la carga emocional que dicho derrotero implicó. Reclama la suma de \$400.000.

Daño al proyecto de vida: Expone que su mandante se vio privada para siempre de la posibilidad de acceder a una vivienda propia, por el doloso accionar de la contraria. Asevera que el presente rubro no se confundo con el daño moral, sino que se vincula con el mismo; por lo que estima la suma de \$300.000.

Daño punitivo: Señala que la entidad financiera demandada (primero a través de un fideicomiso de su propiedad y luego directamente), abusando de una posición de poder derivada de su condición de institución financiera le ocasionó un gran daño a su mandante, con un total desprecio de los derechos personales y patrimoniales de su conferente; ya que al descalificar crediticiamente a la actora no ha tomado los más mínimos recaudos de análisis sobre las inexistentes acreencias que “supuestamente” justificaban la inclusión de la actora la nómina de deudores del BCRA. Entiende que tal falta de diligencia o torpeza se asimilan al dolo eventual de la demandada, más aun cuando la actora no incurrió en ningún incumplimiento que la hubiera hecho adjudicataria de la peor calificación crediticia que otorga el BCRA, y de ello no hay duda en virtud de que obtuvo sentencia favorable en los diversos procesos de habeas data en los que se vio obligada de accionar para obtener la limpieza de su historial. Recalca que habla de dolo eventual por cuanto, el banco accionado cedió un crédito inexistente a un fideicomiso, dicha entidad financiera sabía que el supuesto deudo (actora) buscaba que la información derivada de ese crédito sea corregida, también sabía que la actora gestionaba un crédito hipotecario; y aun así recompró el crédito (inexistente) al fideicomiso impidiendo de ese modo que la sentencia del primer habeas data libere a la actora de acceder al tan anhelado crédito hipotecario.

Asimismo, analiza la operatoria de los bancos respecto a los créditos “basura”, según la cual éstos son transferidos a los fideicomisos financieros para obtener ventajas, entre ellas:

a) Sacar los activos tóxicos de sus balances y consecuentemente deslindarse de la obligación legal de previsionarlos contablemente (conforme es exigido por la Comunicación “B” 9074 del BCRA del 10/09/2007) lavando la cara frente a inversores sobre la composición de carteras de créditos, su experticia a la hora de seleccionar los destinatarios de créditos, etc. Así, expone que, en el caso de autos, según informe del BCRA de página 368 que acompaña, por medio del Fideicomiso Financiero Frankel, la demandada “barrió bajo la alfombra” la suma de \$4.077.989.800 (todos ellos en situación 5), por lo que resulta evidente que al Banco no le resultaba conveniente reflejar esas “acreencias” en su balance por la normativa ya citada.

b) Y otorgar vía libre a los fideicomisos financieros para que ejerzan las técnicas predatorias de cobranzas (aun de créditos inexistentes, como el de la actora) escudándose en la distinta personalidad jurídica para no responder por los daños que éstas técnicas abusivas generan (afectación crediticia, acoso de deudores en sus lugares de trabajo, de esparcimiento, de interacción social, etc.).

Así, concluye que este modo de operatoria de cesión de créditos incobrables, resulta un claro método de maximización de ganancias, que genera que personas totalmente ajenas (como su mandante) resulten severamente afectadas en los movimientos y dibujos financieros que los bancos realizan con un claro abuso de su posición de poder y con un total menosprecio por los derechos individuales de su conferente, lo que hace viable la procedencia del presente rubro, por el que reclama la suma de \$2.000.000.

Funda su derecho, cita jurisprudencia, ofrece pruebas y solicita que oportunamente se haga lugar a la demanda con expresa imposición de costas.

Corrido el correspondiente traslado de demanda, conforme las constancias del primer cuerpo del expediente digitalizado (pág. 399/400), el demandado Banco Galicia y Buenos Aires SA contesta demanda, por intermedio de su letrado apoderado, en el acto de la audiencia del art. 401 dispuesta para el día 25/07/2019 (acta de audiencia obrante en pág. 175/178 del segundo cuerpo del expediente digitalizado).

2. Contestación de demanda. En pág. 123/168 del segundo cuerpo del expediente digitalizado, contesta demanda el letrado apoderado del Banco Galicia y Buenos Aires SAU, solicitando su rechazo con costas.

Preliminarmente, niega que la demanda derive de una relación de consumo (puesto que la propia actora desconoce cualquier vínculo negocial con su conferente), asimismo, niega de manera particular cada uno de los hechos invocados en la demanda.

Por su parte, da su versión de los hechos, expresando que, tal como señaló la actora, al contestar la demanda de amparo informativo, sí hubo un error inicial que luego intentó ser rectificado, pero por lo insuficientes de los plazos procesales, se dictó una sentencia que no reflejaba la verdad de fondo. Ya que, al recibir el traslado de demanda, su mandante rápidamente verificó en el sistema del Banco que la cliente tuvo una cuenta corriente bancaria, que solicitó en el 2012 y que no fue cerrada por su titular (como manda la reglamentación del BCRA), que generó atrasos; sin embargo, no logró acreditar sus dichos por la estrechez temporal de los plazos procesales del amaro informativo, por ello si bien la sentencia era formalmente correcta (no materialmente cierta) su conferente la consintió.

Continúa expresando que la actora olvidó completamente que celebró el contrato de apertura de paquete de servicios con su mandante y que no cumplió con la prestación a su cargo lo que generó un atraso contable y por ende la deuda registrada y luego informada al BCRA por su poderdante, además las operaciones liquidadas por su mandante no fueron cuestionadas ni impugnadas en el plazo legal, ya que la actora adrede omite decir que ha recibido resúmenes de cuenta que no ha impugnado; todo lo cual acreditaría la inexistencia de la antijuridicidad necesaria para la procedencia del deber de reparar.

Afirma que una vez garantizado e impago el saldo deudor de la cuenta de la actora, su representada cedió el crédito mediante una operación legítima y regular, hasta que el fiduciario, conforme normas contractuales, le revirtió la cesión por el reclamo de la accionante. Incluso afirma que la información crediticia se realizó en cumplimiento de la normativa de riesgo del BCRA (Comunicación "A" 5998) de la cual, su mandante, no puede apartarse y lo que no puede generar responsabilidad alguna, ni constituir un ilícito.

Deja de manifiesto que, si bien la sentencia de habeas data (desfavorable a su parte) genera una presunción de un obrar antijurídico, en verdad ello fue consecuencia del déficit cognoscitivo de la vía, que menguó el derecho invocado por su conferente, por lo que entiende que el proceso de amparo no es óbice para que en el presente proceso, con amplio margen probatorio se acredite la realidad de los hechos y la inexistencia de la violación a la ley, a fin de que se desestime la demanda.

Por su parte, expone que la propia actora reconoce que en el año 2017 se ha emitido a su favor una constancia firmada de que su mandante no requería el pago de ninguna operación, y que dicha documentación servía para repeler cualquier intimación injusta y para presentar en el banco donde la actora tramitaba su crédito. Inclusive, desliza que el rechazo del crédito fue realizado por un sujeto ajeno a su mandante y que, en su caso le podría haber solicitado informes adicionales y no lo hizo, por lo que no se puede responsabilizar a su representada por omisiones y arbitrariedades del Banco Nación.

Indica que, contrariamente a lo que afirma la actora, su mandante nunca podría haber obrado con dolo, por tratarse de una razón social (ente ideal) carente de psique y por lo tanto incapaz de sostener conductas causadas con malicia; lo cierto es que su voluntad negocial está expresada por medio de sus múltiples representantes, que ejercen sus cargos en modo orgánico (directorio, gerencias, representantes legales, jefes de área, etc.).

A más, asevera que el BCRA no establece en ninguna resolución según la cual solamente son sujetos de crédito las personas calificadas en situación 1 (normal) sino que, por el contrario, dispone las previsiones que corresponde realizar en caso de tomadores de crédito calificados en situación 2, 3, 4 y 5, es decir, que el rechazo del crédito Banco Nación no es consecuencia directa del obrar de su mandante.

En cuanto al reclamo, de la actora, de indemnización por no haber obtenido un crédito UVA en condiciones que estima históricamente ventajosas, en su relato omite el resultado funesto de los créditos UVA y de la vulnerable situación en la que se hallan los tomadores de financiación en 2017 por la tremenda devaluación e inflación, que han hecho crecer las cuotas cerca de 140%, siendo que (conforme notas de periódicos) las cuotas de esos préstamos triplican el monto de un alquiler y seguirán aumentando sine die; por lo que en definitiva la actora no se ha perjudicado por la falta de obtención del crédito, sino que (a la luz de lo ante dicho) si lo hubiera obtenido se encontraría en una verdadera dificultad financiera por la crisis económica actual.

2.1 Con relación a los rubros indemnizatorios reclamados por la actora, expresa que los mismos no pueden proceder. Así, apunta que el cálculo de la “pérdida de chance” invocada por la accionante es inadecuado, porque el valor UVA ha variado desde la promoción de la demanda, porque su reglamentación, calculo y condiciones son contingentes y no constantes, porque reflejan una expectativa incierta y, además, porque la pérdida de chance debe considerarse según el resultado final y no parcial de negocio.

Asimismo, rechaza el rubro “daño al proyecto de vida” por la falta de certeza del mismo, negando las especulaciones formuladas en torno a la realización personal de la actora a través de la adquisición de un departamento.

Sobre el rubro de “daño moral”, alega que no existe prueba alguna de que los hechos señalados fueren eficaces para producir un daño moral de la magnitud reclamada en autos por la actora, ya que incluso su mandante para evitar perjuicios o demoras emitió un documento para su presentación en el Banco Nación; todo ello sin perjuicio de que no existe la antijuridicidad invocada. Además, entiende que la suma reclamada excede los parámetros con otras indemnizaciones otorgadas por los tribunales en casos aún más agraviantes (como el fallecimiento de hijo menor o padre durante la infancia).

2.2 Excepciones de fondo.

Prescripción. Paralelamente plantea la prescripción de la acción, como defensa de fondo, por entender que, desde el acaecimiento de los pretendidos perjuicios, hasta la promoción de la presente demanda ha superado el plazo legal.

Inconstitucionalidad. Por último, plantea la inconstitucionalidad del art. 52 bis de la ley 24.240, por cuanto la figura de la multa civil resulta violatoria del principio de reserva non bis in ídem, juez natural y del de propiedad. Entiende que la multa civil se trata de una clara sanción de tipo penal que, de aplicarse, violaría las garantías de defensa que otorga el derecho penal reconocidas constitucionalmente, como ser, el in dubio pro reo, la graduación de las penas, la participación criminal, la gravedad de la culpa, principio de legalidad y non bis in ídem.

Expresa que la norma no respeta ninguno de los principios que emanan del art. 18 CN (Principio de Reserva) ni de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional; es decir, no describe con precisión la conducta prohibida, ni requiere un factor subjetivo de atribución, no precisa las pautas mínimas que habrán de guiar la graduación de la sanción, no requiere ningún ánimo en particular en la conducta del dañador, no distingue ni refiere a la conducta dolosa ni a un parámetro de gravedad alguno. Afirmo que no se puede exigir únicamente el aspecto objetivo del incumplimiento, sino que es necesaria una particular subjetividad.

Continúa su exposición refiriendo que la Garantía de los Jueces Naturales significa la existencia de órganos judiciales establecidos en forma permanente por la ley conforme las competencias asignadas constitucionalmente. Entonces, señala que si se acepta la pretensión (multa civil), un juez ajeno al procedimiento penal impondría una sanción en franca colisión con la garantía constitucional.

Establece que, el principio de presunción de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario, es un pilar del derecho penal, mientras que el la Ley de Defensa del Consumidor, en caso de duda se presume en favor del consumidor, es decir, que en el caso de la mencionada ley se puede aplicar una sanción de naturaleza penal sin haberse probado el incumplimiento. Por ello entiende que, el principio de las cargas dinámicas de la prueba consagrado en la Ley consumeril contraría el principio de inocencia.

Incluso, declara que los daños punitivos constituyen un ataque a la garantía constitucional del derecho de propiedad, ya que implicaría sustraer del patrimonio de su mandante, sumas de dinero sin una causa válida que lo justifique.

Por todo lo expuesto solicita se declare la inconstitucionalidad mentada, expresando que, para el caso de que se rechace el planteo, sostiene subsidiariamente la improcedencia de la aplicación de multa civil reclamada, por las razones que expone en el punto VII.B) de su presentación a las que me remito en honor

a la brevedad.

Funda su derecho, cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal, ofrece pruebas y solicita que oportunamente se rechace la presente acción con imposición de costas a la actora.

3. Trámite procesal de la causa. El 25/072019 (pág. 175/178 del segundo cuerpo digitalizado) se celebra la audiencia prescripta en el art. 401 CPCCT, acto en el cual la parte demandada contesta demanda (cfr. lo descripto en el punto 2). En dicho acto se corre traslado, a la actora, de la excepción de prescripción e inconstitucionalidad interpuestas (quien contesta posteriormente conforme consta en pág. 193/198 del segundo cuerpo digitalizado), la que se reserva para definitiva. Asimismo, sobre el pedido de ordinarización del proceso, luego de sustanciado el mismo, se resuelve no hacer lugar a la oposición y se ordena la apertura de la presente causa a pruebas por el término de quince (15) días, proveyéndose además las ofrecidas por cada parte:

Por la actora (ofrecida en el escrito de demanda y en pág. 163/173 del segundo cuerpo del expediente digitalizado):

DOCUMENTAL: Constancias de estos autos y de los amparos mencionados en el escrito de demanda, a tal fin pide oficio al Juzgado Federal N° 1 de Tucumán a fin de que remita la causa “Posse Silva Jimena c/ Fideicomiso Financiero Frankel - Comafi Fiduciario Financiero SA s/ Hábeas Data” Expte. N° 024336/2017 (pág. 277/278 del segundo cuerpo del expediente digitalizado). Oficio al Juzgado Civil y Comercial Común de la IIª Nominación a fin de que remitan los autos “Posse Silva Jimena c/ Banco Galicia s/ Amparo Informativo” Expte. N° 131/18 (pág. 233/237 del segundo cuerpo del expediente digitalizado).

En cuanto a la documental en poder de terceros, solicita se intime a la demandada a fin de que presente la siguiente documentación: Contrato constitutivo del Fideicomiso Financiero Privado Frankel; Contrato o instrumento de cesión del crédito de la actora otorgado por la demandada en favor del Fideicomiso Financiero Privado Frankel; Contrato, notificación, nota o instrumento en el que se instrumentó la retrocesión del crédito de la actora en favor del Banco Galicia; y el contrato o instrumento de cesión del crédito de las personas mencionadas en las comunicaciones del BCRA N°: C68038 del 01/04/2015, C66345 del 29/07/2014, C74312 del 09/03/2017, C68342 del 12/05/2015, C69784 del 20/11/2015, C71281 del 12/05/2016, C77022 del 14/11/2017, C77121 del 23/11/2017, C76045 del 24/08/2017, C71004 del 14/04/2016. Queda intimada la demandada en el acto de la audiencia del art. 401 CPCCT y por decreto de pág. 215 del segundo cuerpo del expediente digitalizado se hace efectivo el apercibimiento del art. 335 CPCCT al no haber presentado la documental requerida.

INFORMATIVA: Oficio al registro Inmobiliario de la Provincia (pág. 217/222 del segundo cuerpo digitalizado), al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas (pág. 307/311 del segundo cuerpo del expediente digitalizado), al Banco Central de la República Argentina (pág. 355/401 del segundo cuerpo del expediente digitalizado, continuando en el tercer cuerpo digitalizado de fs. 01/228, asimismo se agrega informe requerido subsidiariamente por la actora, en fecha 15/07/2020 y en fecha 18/09/2020), a la ANSES Tucumán (informe del 15/07/2020), al Banco de la Nación Argentina sucursal Casa Central Tucumán (pág. 297/298 del segundo cuerpo del expediente digitalizado), a la Inmobiliaria Lipriandi Propiedades (pág. 245/246 del segundo cuerpo del expediente digitalizado), a la inmobiliaria Guzmán y Guzmán (pág. 241 del segundo cuerpo del expediente digitalizado - contesta pero no evacúa informe), a la inmobiliaria Schilman (no contesta), a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (pág. 263/271 del segundo cuerpo del expediente digitalizado).

PERICIAL CONTABLE: solicita se sortee un perito contador a fin de que realice el informe requerido en el ofrecimiento probatorio. El perito sorteado, Ramón Augusto Romero Abadie, acepta el cargo conforme pág. 289 del segundo cuerpo del expediente digitalizado. Presenta pericial en fecha 03/07/2020.

PERICIAL INFORMATICA: solicita se sortee un perito informático a fin de que realice el informe requerido en el ofrecimiento probatorio. La perito ingeniera en sistemas de información sorteada, Nieves Carmela Colque, acepta el cargo conforme pág. 345 del segundo cuerpo del expediente digitalizado. Presenta

informe pericial mediante escritos del 17/07/2020 y 23/07/2020.

Por la demandada (ofrecida en el escrito de contestación de demanda):

CONFESIONAL: Se cita a la actora a absolver posiciones (pliego de posiciones en pág. 201 del segundo cuerpo digitalizado y en pág. 205 del mismo cuerpo, acta de audiencia confesional).

INSTRUMENTAL: Constancias de autos.

PERICIAL CONTABLE: Solicita se lleve a cabo la pericia por medio del Juzgado de igual fuero y clase de la provincia de Buenos Aires (no producida conforme consta en resolución de fecha 10/08/2020). Asimismo, solicita se sortee un perito contador a fin de que realice el informe requerido en el ofrecimiento probatorio (esta segunda parte de la pericia a realizarse en la provincia se acumula con la prueba de la actora, la que tampoco fue producida conforme consta en la última parte del informe de fecha 03/07/2020 y de la providencia de fecha 10/08/2020).

INFORMATIVA: Ofrece oficio al Correo Oca SA (no producida conforme nota de pág. 335 del segundo cuerpo del expediente digitalizado), a Nic.gov.ar (no producida conforme nota de pág. 335 del segundo cuerpo del expediente digitalizado) y al Banco de la Nación Argentina.

El 20/10/2020 se confecciona planilla fiscal, y por decreto de fecha 20/11/2020 se exime a la actora del pago de la misma. Asimismo, la parte demandada abona el monto correspondiente a su parte (09/12/2020 y 16/12/2020). Finalmente, en fecha 16/02/2022 y 08/06/2022, por la cuestión de fondo y por la inconstitucionalidad respectivamente, emite su dictamen la Sra. Agente Fiscal, quedando los presentes autos en condiciones de dictar sentencia y,

C O N S I D E R A N D O

1. Hechos y pretensiones. La parte actora inicia acción de consumo en contra del Banco Galicia y Buenos Aires SA por los daños que sufrió como consecuencia de haber sido informada en las bases de datos de calificación de usuarios del sistema financiero como deudora nivel 5 (irrecuperable según los parámetros del Banco Central de la República Argentina), afirmando que dicha información resulta ilegítima y errónea pues nunca fue cliente del Banco demandado.

Por su parte el letrado apoderado de la demandada al contestar demanda, si bien rechaza la demanda entablada en su contra, por un lado, reconoce que hubo un error inicial que intentó ser rectificado; y por el otro, manifiesta que la actora si celebró un contrato de apertura de paquete de servicios con su mandante, y que, como consecuencia de un atraso contable por parte de la actora, la deuda registrada fue informada al BCRA, en cumplimiento con la normativa existente.

2. El encuadre jurídico. Conforme los hechos vertidos en la demanda, la actora afirma no haber sido cliente del Banco demandado, por su parte la accionada afirma que la actora celebró un contrato de apertura de paquete de servicios con su parte. Entonces, resta determinar si nos encontramos ante una relación de consumo a los fines de establecer la norma que regirá el presente caso.

De lo expuesto por las partes y las pruebas aportadas, que más adelante analizaré pormenorizadamente, entiendo que no caben dudas que nos encontramos ante una acción de consumo, ello por cuanto si bien se encuentra controvertido si efectivamente existió un contrato de consumo o fue meramente una vinculación de consumo entre actora y demandada, lo cierto es que el Banco Galicia y Buenos Aires SA es sin lugar a dudas un proveedor en los términos del art. 2 de la Ley 24.240, quien, con o sin consentimiento (lo que se analizará a posteriori) expuso a la actora a una relación de consumo.

Es decir, incluso para el caso de que no exista un contrato de consumo entre las partes, por no haber estado presentes los pilares del contrato (consentimiento, autonomía de la voluntad, fuerza obligatoria de lo acordado y efecto relativo) sí existió un vínculo de consumo al que la actora estuvo expuesta, como lo están a diario un sinnúmero de consumidores sin saberlo; por lo que habrá que aplicarse en el caso, todas las normativas constitucionales y concordantes que conforman el estatuto consumeril.

En primer lugar, las disposiciones constitucionales del art. 42, consagrado a favor de los consumidores, el art. 75 inc 22 (Tratados Internacionales) y las disposiciones de La Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, los arts. 1092, 1119 CCCN y cc., que resulten aplicable en la especie, con las consecuencias que de dicho régimen se derivan en favor del consumidor (trato digno, derecho de información, interpretación a favor, entre otros).

Conforme lo antedicho, cabe mencionar que la “constitucionalización” de los derechos de los consumidores evidencia un notable progreso en nuestro ordenamiento jurídico ya sea en su faz sustancial como en sus vertientes procesales, sustentadas principalmente en la fundamentabilidad del “derecho a procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos” del art. 42 de la Constitución Nacional, y en la regulación del art. 43 lo que ha llevado a establecer “un concreto derecho constitucional de acceso a la solución de conflictos de los consumidores”.

3. Excepción de prescripción de la acción. Sustanciado el planteo y contestado por la parte actora, conforme lo relatado precedentemente en el punto 3 de los considerandos, corresponde, en primer lugar, el tratamiento de la prescripción de la acción planteada oportunamente por la demandada y pendiente de resolución para ésta oportunidad. Al respecto, podemos decir que la prescripción reconoce dos vertientes: prescripción libertaria (arts. 2554 al 2564 del CCCN) y prescripción adquisitiva (arts. 2565 al 2572 del CCCN).

Entonces, en el caso que nos compete se refiere al caso particular de la prescripción liberatoria del derecho y extintiva de la obligación. Se trata de una verdadera excepción, ya que no discute la legitimidad jurídica del reclamo, sino que manifiesta la existencia de un impedimento de hecho (transcurso de un determinado plazo) que invalida un reclamo. Se da, pues, cuando transcurre el tiempo sin que el titular de un derecho lo ejercite. Extingue la relación jurídica que tiene virtualidades en orden al Derecho Positivo, pero deja subsistente una relación de Derecho Natural, esto es, extingue la acción o facultad de demandar judicialmente, pero deja intacta la obligación natural existente.

La prescripción liberatoria exige la concurrencia de tres elementos: a) el transcurso del tiempo, b) la inacción del titular del derecho, y c) la posibilidad de actuar.

Así, como primera medida, tengo presente que el art. 2554 del CCCN, establece como regla general que, el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. Por su parte el art. 2561 del mismo cuerpo legal establece, para el reclamo de indemnización por daños derivados de la responsabilidad civil, un plazo especial de prescripción de tres años, mismo plazo establecido en el art. 50 de la Ley 24.240.

Teniendo en cuenta esto, corresponde remitirnos a las constancias de autos, en particular el escrito de demanda y documental aportada; de donde se desprende que tras iniciar los trámites para acceder a un crédito hipotecario en el Banco Nación, en julio el 2017, es que tomó conocimiento de que se encontraba informada como deudora nivel 5 en las bases de datos del BCRA y del Veraz. Por su parte, consta en autos que el requerimiento de mediación fue ingresado el 28/08/2018 y el escrito de demanda el 04/04/2019. Entonces, sin hacer un análisis más profundo respecto de cuando se considera que la prestación es exigible, de acuerdo con nuestro Código de fondo, surge a las claras que el plazo de prescripción de tres años no se ha cumplido en el caso de autos, por lo que corresponde desestimar la excepción de prescripción intentada por la parte demandada al contestar demanda y no hacer lugar a la misma; imponiendo además las costas en su contra conforme art. 105 del CPCCT.

4. Inconstitucionalidad. Conforme consta en autos (punto 3 de los considerandos) corrido el traslado del planteo de inconstitucionalidad, la actora contesta y, una vez oída la Sra. Agente Fiscal, nos encontramos en condiciones de analizar y resolver dicha cuestión.

Entonces, es necesario partir de la premisa de que la Ley 24.240 tiene plasmado en su texto una finalidad tuitiva de los derechos del consumidor, protegiendo al consumidor o usuario, personas físicas o jurídicas, que contratan a título oneroso bienes o servicios en el mercado, para su consumo final o beneficio propio o

de su grupo familiar o social; o a quien sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art.1). En armonía con dicho fin, es que el art. 52 bis prevé la aplicación de una multa civil, a favor del consumidor, al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.

Entiendo que el término más adecuado para referirnos a los daños punitivos es el de “sanción punitiva disuasiva”, este instituto, en el Derecho del Consumidor se explica por la función de tutela que la Ley N° 24.240 atribuye al Estado, a los efectos de disuadir a las empresas proveedoras de incurrir en conductas reiteradas y desaprensivas que lesionen a los bienes jurídicos protegidos por la ley de defensa del consumidor. Y es en ésta órbita que puede admitirse, a modo de incentivo para la denuncia y represión de las conductas desaprensivas a las que nos venimos refiriendo que la misma sea a favor del consumidor.

Así, tratándose los daños punitivos de una sanción punitiva disuasiva civil o privada, entiendo lógico que su imposición deba estar rodeada de las garantías constitucionales consagradas en el art. 18 de la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. Sin embargo, no se llega a acreditar que la norma sub análisis repugne a los derechos y garantías constitucionales ni disposiciones de tratados internacionales que cita el demandado. La naturaleza de los daños punitivos en sí misma considerada, no merece ninguna objeción constitucional. Tanto menos si se advierte que el instituto tiene regulación expresa y se aplica en tanto en cuanto se den sus específicas condiciones previstas legalmente.

Más aún, la indemnización que se fije en concepto de daño punitivo tiene como objetivo castigar a quien produce un mal y disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros posibles infractores de repetir una misma acción dañina. Se busca evitar que se obtenga un beneficio merced a una conducta ilícita y ante la indiferencia por las lesiones provocadas a un sin número de consumidores. En esa inteligencia se tiende a desalentar ese tipo de conductas mediante sanciones que insten al infractor a no repetirlas, por lo que necesariamente se debe identificar una conducta claramente reprochable.

Inclusive, si bien, en contrario con lo que afirma el demandado, pese a la impropia formulación legal, el instituto del daño punitivo no se presenta como incompatible con la Constitución Nacional ni con el sistema represivo, sino que, por el contrario, resulta una herramienta complementaria y hasta superadora, en tanto alcanza el castigo y la prevención de conductas que generalmente escapan a la mano de la Justicia Penal.

Al respecto nuestra Corte Suprema de Justicia viene confirmando sentencias que han aplicado daños punitivos en el entendimiento de que la norma resulta constitucional y así debe mantenerse (ver entre otras, CSJT: sentencias N° 1428/2016; N° 741/2019; N° 623/17; N° 2260/19; N° 287/18; N° 1896/18; N° 384/19; N° 1190/2019).

Por todo lo expuesto, haciendo propios los argumentos vertidos por la Sra. Agente Fiscal en su dictamen, a los que me remito y, en virtud de que la declaración de inconstitucionalidad resulta un acto de suma gravedad institucional que debe considerarse como última ratio del orden jurídico, es que entiendo que corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad tentado, con costas a la demandada (art. 5 CPCCT).

5. El análisis probatorio. Desbrozado el camino, corresponde entonces dilucidar el fondo de la cuestión.

En primer lugar, antes de sumergirnos en el examen de las pruebas aportadas, tengo presente que, para que proceda la responsabilidad civil es necesario constatar: 1) la existencia de un hecho generador de un daño; 2) que medie un nexo causal entre la acción u omisión del supuesto responsable y el daño; y 3) que exista una responsabilidad civil imputable, ya sea objetiva o subjetiva (Mosset Iturraspe, Derecho de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni; Trigo Represas, Félix y Compagnucci de Caso, Rubén, "Responsabilidad Civil por Accidentes de Automotores", Ed Hammurabi).

Sobre este último cabe destacar que, en las relaciones de consumo, conforme lo estipula el artículo 40 de ley 24.240 el “factor de atribución” es objetivo, y el eximente de responsabilidad está basado en la ruptura del nexo causal, es decir, la prueba del caso fortuito, el hecho de la víctima o el hecho de un tercero por el que no se deba responder” (Lorenzetti, Ricardo, Consumidores, Rubinzal Culzoni, Sta Fe, 2009, p. 499/500) demostrando la “no culpa”.

Dicho esto, corresponde analizar la documental obrante en autos.

Conforme pág. 377 del primer cuerpo del expediente digitalizado, se reservó la documentación original ofrecida por la actora, que en este acto tengo a la vista, y de la que se observan: recibos de sueldo de la actora del mes de junio, julio y agosto del año 2018; Factura de fecha 11/04/2018 por honorarios; carta documento de fecha 02/08/2017 dirigida al Banco demandado; Resolución de acuerdo previo emitida por el Banco Nación de fecha 14/09/2017 y de fecha 03/08/2018; Contratos de Locación de fecha 05/11/2017 y de fecha 19/06/2018; impresión web de correo electrónico el Banco Nación de fecha 25/07/2017; y Certificado Notarial de estudio de título en fecha 26/10/2017, emitido el 14/03/2019. De lo antes descripto se observa, entre lo más relevante, que la actora efectivamente intimó al Banco demandado a que rectifique sus datos crediticios ante el Veraz y cualquier otra base de datos mediante carta documento de fecha 02/08/2017; que inició el proceso de alta de solicitud de préstamo hipotecario mediante la página web del Banco Nación el 19/07/2017 conforme constancia vía email; que celebró con el Banco Nación en dos oportunidades un acuerdo previo de préstamo hipotecario para vivienda, siendo que, en el primero, celebrado el 14/09/2017, se le otorgaba la suma de \$1.950.000 a una tasa de interés del 3.50%; mientras que en el celebrado el 03/08/2018 se le otorgaba un importe de \$1.600.000 a un interés de 6.50%; y que realizó por medio de un Escribano el estudio de título del inmueble que pretendía comprar con el préstamos hipotecario que perseguía.

Por su parte, la actora ofrece las constancias del juicio caratulado “Posse Silva Jimena María c/ FF Privado Frankel - Comafi Fiduciario Financiero SA s/ Habeas Data” que tramitó por ante el Juzgado Federal de Tucumán de la Iª Nominación cuya copia certificada fue remitida al Juzgado conforme constancia de pág. 237 del segundo cuerpo del expediente digitalizado. Dicho proceso fue iniciado por la actora el 31/07/2017 y, mediante sentencia de fecha 22/05/2019 se hizo lugar a la demanda contra el fideicomiso, en virtud de considerarse acreditado que se la accionante se encontraba informada por la Central de Deudores del Sistema Financiero y Central de Cheques del BCRA en virtud de una información emanada por el Fideicomiso Frankel en el período 5/17 en situación 5 y que estaba informada en igual situación ante el Veraz por una supuesta deuda al mencionado Fideicomiso, además en virtud de que la clasificación de deudores fue efectuada por una entidad con quien la actora no operó (en contradicción con la Comunicación “A”2180), es decir, por el Fideicomiso Frankel, por lo que se entendió que dicha información era errónea o falsa y que afectó el buen nombre y honra de la actora.

Asimismo, la actora aporta las constancias del juicio “Posse Silva Jimena María c/ Banco de Galicia y buenos Aires SA s/ Amparo Informativo” que tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la IIª Nominación, el que fue remitido a la vista conforme constancia de pág. 278 del segundo cuerpo del expediente digitalizado. Dicha acción fue iniciada el 14/02/2018 y el 29/06/2018 se dictó sentencia definitiva haciendo lugar al amparo informativo por considerar acreditado que la actora se encontraba informada en la Central de Deudores del BCRA por el Banco Galicia en el período 07/17 en situación 5, que la demandada no logró demostrar el vínculo comercial con la actora ni la existencia de la pretendida deuda.

Sobre la documental en poder de terceros, de las constancias de autos surge que en el acto de la audiencia celebrada el 25/07/2019 la demandada quedó intimada a adjuntar la documentación allí descripta, sin embargo, pese a encontrarse notificada, no aportó dicha documentación, por lo que conforme providencia de fecha 28/08/2019 se hizo efectivo el apercibimiento del art. 335 CPCCT en contra de la accionada.

En cuanto a la prueba informativa, en el segundo cuerpo del expediente digitalizado se encuentran agregados los oficios requeridos: En pág. 217/222 el Registro Inmobiliario de la Provincia informa que no se

registran bienes inmuebles a nombre de la actora. En pág. 245/246 la Inmobiliaria Lipriandi informa que el valor promedio de cotización del metro cuadrado para departamentos en Barrio Sur, durante el mes de septiembre de 2017 era de \$23.000, durante agosto de 2018 era de \$33.000 y durante marzo de 2019 era de \$ 48.000. En pág. 263/271 la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor informa que la accionante posee un vehículo a su nombre identificado con el dominio AD031QX y que no registra prenda ni gravámenes. En pág. 297/298 el Banco Nación informa que redactó una Resolución de Acuerdo Previo el 14/09/2017 por la suma de \$1.500.000 a una tasa de 3.50%, y otra Resolución de Acuerdo Previo el 03/08/2018 por \$1.600.000 a una tasa de 6.50%. En pág. 307/311 el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas adjunta copia legalizada de Acta de Nacimiento de la hija de la actora María Justina Asfoura.

En pág. 355/401 del segundo cuerpo del expediente digitalizado continuando en pág. 1/228 del tercer cuerpo del mismo, el Banco central de la República Argentina contesta oficio adjuntando las siguientes Comunicaciones C68038 del 01/04/2015, C66345 del 29/07/2014, C74312 del 09/03/2017, C68342 del 12/05/2015, C69784 del 20/11/2015, C71281 del 12/05/2016, C77022 del 14/11/2017, C77121 del 23/11/2017, C76045 del 24/08/2017, C71004 del 14/04/2016; que básicamente informan que corresponde suprimir los registros informados por el Fideicomiso Frankel y rectificar en situación 1 los registros informados por el Banco Galicia (sobre la comunicación C76045 del 24/08/2017, por medio de la misma se hace saber respecto de la cautelar dictada en el marco del proceso “Posse Silva Jimena María c/ FF Privado Frankel - Comafi Fiduciario Financiero SA s/ Habeas Data” a fin de que bloquee los datos referidos a la actora). Asimismo, acompaña planilla de “tipo de cambio minorista de referencia de la Ciudad de Buenos Aires” del 01/06/2010 al 22/05/2020 y acompaña un informe de entidades financieras del primer semestre del año 2017 donde surge que el Fiduciario del Fideicomiso FF Privado Frankel es Comafi Fiduciario Financiero SA, y que su Fiduciante es el Banco de Galicia y Buenos Aires SA. Por su parte informa que las copias respecto del Régimen Informativo de Deudores Financieros, donde la actora figura informada como deudora irrecuperable, son coincidentes con su base de datos.

En fecha 15/07/2020 la ANSES Tucumán informa que la actora (legajo N° 986392) ingresó a dicha institución el 01/10/2009 como Planta Transitoria y a partir del 01/12/2011 paso a Planta Permanente, desarrollando actuación gremial desde el 14/11/2012.

Abordando las pruebas periciales, en fecha 03/07/2020 el perito Contador Ramón Augusto Romero Abaide presenta informe pericial, quien responde en primer lugar el cuestionario de la actora, expresando que el 14/09/2017 la suma de \$1.950.000 equivalía a 97.500 UVAs ($1.950.000/20$) y que el 03/08/2018 la suma de \$1.600.000 equivalía a 63.719,63 UVAs ($1.600.000/25,11$), por lo que la diferencia entre ambos preacuerdos es de 33.780,37 UVAs. Continúa exponiendo que el valor en pesos de la diferencia de UVAs antes consignada, según la cotización del 01/03/2019 (32,89) asciende a \$1.111.036,37. Asimismo, responde que la cotización del dólar tipo vendedor del Banco Nación es de \$17,20 para el día 14/09/2017, de \$ 27,80 para el día 03/08/2018 y de \$40,70 para el día 01/03/2019. Por otra parte, contesta que el porcentaje de incremento del dólar desde el 14/09/2017 al 03/08/2018 es del 61,628%, del 14/09/2017 al 01/03/2019 es del 136,628% y del 03/08/2018 al 01/03/2019 es del 46,403%. También expresa que la diferencia de interés entre el preacuerdo otorgado por el Banco Nación del 14/09/2017 (por la suma de \$1.950.000 a un interés 3,5%) y del 03/08/2018 (por la suma de \$1.600.000 a un interés de 6,5%) es de un 3%. Por último calcula, por un lado, la diferencia de costo financiero entre ambos créditos antes mencionados, explicando que, si al costo financiero del crédito de \$1.600.000, que asciende a \$2.040.711,82, se le resta el costo financiero del crédito de \$1.950.000, que asciende a \$1.202.293,71, se obtiene la suma de \$848.418,11 y que dicha diferencia reflejada en UVAs asciende a 21.156,20 UVAs. Por otro lado, ofrece otro método de cálculo que estima más adecuado, advirtiendo que, si al costo financiero del crédito de \$1.600.000 (calculado con la tasa del 6.5%) que asciende a la suma de \$2.040.711,82 le restamos el costo financiero del mismo crédito calculado pero calculado con la tasa del 3.5% que asciende a la suma de \$986.497,40 resulta que la diferencia de costo financiero entre ambas tasas es de \$1.054.214,51 y convirtiendo dicho monto en UVAs resulta que la diferencia es de 41.983,85 UVAs. Acompaña planillas. En cuanto al cuestionario de la demandada, el auxiliar de justicia requiere, requiere previamente un oficio a ANSES, de lo que no se hace lugar por encontrarse vencido el plazo, por lo que

dicho cuestionario no fue respondido.

En referencia a la pericial informática, ofrecida por la actora, la perito Nieves Carmela Colque presenta informe pericial en fecha 17/07/2020 y 23/07/2020. En dicho informe se expide sobre la autenticidad de las páginas web ofrecidas como documental en el cuaderno de pruebas de la actora N°1, específicamente en el punto 7°), 21°), 31°) 32°), 39°) y 40°), a tal fin accedió al contenido de los sitios webs solicitados extrayendo la información solicitada en formato digital y/o por captura pantalla. Por su parte para responder al segundo párrafo del cuestionario, respecto a los correos electrónicos mencionados en los apartados 4°), 10°), 14°), 24°) y 25°) del cuaderno de pruebas del actor N° 1, el auxiliar de justicia solicita a la Sra. Posse Silva que le permita el acceso a su cuenta de mail (jimena_posse_silva@hotmail.com), para poder verificar y validar la veracidad de los mismos, detallando cada uno y mostrando el contenido de cada uno en los correspondientes anexos, a los que me remito.

Continuando el análisis probatorio, tengo presente la prueba documental aportada por la demandada consistente en resúmenes de cuenta emitidos por la misma a nombre de la actora. Sobre la prueba confesional, la actora respondió que no suscribió solicitud de paquete de productos con el banco demandado, que no recibió resúmenes en su domicilio y que si es cierto que el Banco Galicia le emitió un certificado de inexistencia de deuda.

En cuanto a las restantes pruebas ofrecidas por la demandada (instrumental, pericial contable e informativa), las mismas no se produjeron.

5.1 Ahora bien, en virtud de la breve reseña efectuada sobre la actividad probatoria desplegada por las partes, corresponde dejar sentado que tengo por demostrado, en primer lugar, que la demandada informóa la actora como deudora en la base de datos financieros del Banco Central de la República Argentina por el período 07/2017, ello en virtud del reconocimiento expreso efectuado por la misma en su escrito de contestación de demanda y del informe de Régimen Informativo de Deudores Financieros aportado en copia por la actora y reconocido como auténtico por el BCRA en el oficio antes mencionado.

Asimismo queda acreditado que la demandada vendió/cedió activos, entre los que se encontraba la actora como deudora, al Fideicomiso F. F. Privado Frankel y que posteriormente retrotrajo dicha cesión, atento a que (conforme el escrito de contestación de demanda), el letrado apoderado del Banco demandado expone que “la actora no cumplió con la prestación a su cargo, lo que produjo un atraso contable, y por ende, la deuda registrada por mi mandante, luego informada al BCRA”; además expone que su mandante “una vez generado e impago el saldo deudor de la cuenta ha cedido el crédito, mediante una operación legítima y regular, hasta que el fiduciario, en previsión de las normas contractuales, ha revertido la cesión por el reclamo de la hoy accionante.” Inclusive, del escrito de contestación de demanda del juicio “Posse Silva Jimena María c/ FF Privado Frankel - Comafi Fiduciario Financiero SA s/ Habeas Data” que tramitó en la Justicia Federal, cuya copia certificada en este acto tengo a la vista, surge que el mencionado Fideicomiso afirma que el Banco de Galicia y Buenos Aires SA le cedió ciertos créditos entre los que se encontraba la actora.

Entonces, tengo presente que *“el reconocimiento de un hecho relevante en la formulación de la pretensión, o su oposición, opera a modo de confesión y tiene carácter vinculante para el juez, porque siendo un testimonio de la propia parte no requiere del animus confidendi para considerarlo negativo a su derecho”* (Cámara Iª en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan S., J. A. c. S., L. A. 02/09/2010 Publicado en: LLGran Cuyo 2011 (mayo), 413 Cita online: AR/JUR/78083/2010).

Por lo antes expresado y no existiendo debate entre las partes respecto a los hechos antes descriptos entiendo que surge acreditado que la demandada informó al BCRA como deudora y que además posteriormente la cedió al Fideicomiso mencionado el que posteriormente retrotrajo dicha cesión atento al reclamo efectuado por la accionante.

5.2 Entonces, los hechos controvertidos versan sobre las siguientes cuestiones de hecho:

a) Si existió un contrato de consumo celebrado entre actora y demandada (y en su caso si la misma no cumplió con el pago de las prestaciones a su cargo) o si por el contrario la actora se vio afectada por un “vínculo de consumo” donde no prestó su consentimiento. Al respecto, tengo presente que la demandada no aportó prueba suficiente tendiente a acreditar que la actora había contratado un paquete de cuenta corriente con su parte y que se había atrasado en el pago de sus obligaciones, tal como afirma en su escrito de contestación de demanda. Solamente acompaña, como prueba documental, impresiones de resúmenes de cuenta a nombre de la actora emanados por su parte, lo que no constituye una prueba contundente para demostrar sus dichos justamente porque esos resúmenes son confeccionados unilateralmente por la propia accionada, lo que le resta valor probatorio al no existir, en autos, otro instrumento con el que se pueda cotejar la misma. Por otro lado, la única prueba ofrecida y producida, tendiente a acreditar la celebración de un contrato comercial de cuenta corriente con la accionante o la existencia de la pretendida deuda, fue la prueba de absolución de posiciones ofrecida por la demandada, la que tampoco sirve para confirmar su versión, ya que de las respuestas rendidas por la actora solamente se puede rescatar que ambas partes reconocen que la demandada extendió un certificado de inexistencia de deuda, donde según la actora decía que la misma no tenía ninguna prestación ni deuda con la demandada; lo que también se corrobora en virtud de la nota de fecha 18/07/2017, que en copia se acompaña pero que fue reconocida su autenticidad por ambas partes. Más aún, debo destacar que conforme la normativa legal imperante en el presente proceso le correspondía principalmente a la demandada probar sus afirmaciones (art. 302 CPCCT), además por ser quien se encontraba en mejores condiciones de precisar cuál era el origen de la deuda y su composición (art. 53 LCD).

Inclusive, no pasa desapercibido al Sentenciante la postura asumida por la demandada, que se mostró reticente a prestar la debida colaboración en el proceso, omitiendo aportar la prueba obrante en su poder, pese a habérselo intimado expresamente conforme la última parte de la prueba documental de la actora proveída en el acto de la audiencia del 401 CPCCT. Por todo lo expuesto, es que entiendo que opera a favor de la accionante la presunción de que la Sra. Posse Silva no contrató con la demandada, sino que la misma fue expuesta a una relación de consumo, en virtud de un vínculo comercial del que ella no tuvo noticias y respecto del cual no prestó su consentimiento. En definitiva, la parte demandada tiene una carga procesal de explicitación, no basta con negaciones genéricas en necesario que esta lleve a cabo un esfuerzo para desvirtuar los hechos que se le enrostran.

b) Si el Banco demandado es fiduciante del Fideicomiso FF Privado Frankel. Del informe aportado por el Banco Central de la República Argentina (pág. 355/401 del segundo cuerpo del expediente digitalizado, pág. 1/228 del tercer cuerpo del expediente digitalizado), surge claramente que el Banco de Galicia y Buenos Aires SA es el fiduciante del Fideicomiso en cuestión y su fiduciario es Comafi Fiduciario Financiero SA. Es decir que el Banco accionado se valió del contrato de fideicomiso para transmitir créditos al Fideicomiso FF Privado Frankel, entre los que se encontraba uno a nombre de la actora, pese a que dicho crédito (conforme se analizó previamente) era inexistente, pasando a ser, el fideicomiso mencionado, el nuevo acreedor de la actora.

Corresponde hacer hincapié en que el demandado fue intimado oportunamente para acompañar el contrato constitutivo del Fideicomiso, el contrato o instrumento de cesión de crédito de la actora, entre otros, y sin embargo guardó silencio, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en el art. 335 CPCCT (mediante providencia de pág. 215 del segundo cuerpo del expediente digitalizado), por lo que en este caso, y a tenor de lo dispuesto por la normativa previamente citada, tengo por auténticas las manifestaciones de la actora.

Sin perjuicio de la orfandad probatoria de la parte demandada, de las copias certificadas del juicio “Posse Silva Jimena María c/ FF Privado Frankel - Comafi Fiduciario Financiero SA s/ Habeas Data” surge que, en el escrito de contestación de demanda, el fiduciario del Fideicomiso Financiero Privado Frankel manifiesta que el 31/10/2014 el Banco de Galicia y Buenos Aires SA le cedió determinados créditos (uno de ellos a nombre de la actora). Asimismo, mediante sentencia dictada en fecha 22/05/2019 en el mencionado proceso, se hizo lugar al amparo puesto que se corroboró que el Fideicomiso allí demandado informó a la actora como deudora en situación 5 ante el BCRA en el período 05/2017, información que es errónea o

falsa, haciéndoselo responsable de la calificación, registro e información crediticia.

c) Si le correspondía a la demandada informar a la actora como deudora irrecuperable, de acuerdo a las normativas dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (Comunicación "A" 5998) . En primer lugar, atento a que, como se dijo en el apartado anterior, no se acreditó que la actora haya sido cliente de la demandada y que, por ende, en virtud de ello haya mantenido una deuda con la misma, es que puedo concluir que no le correspondía al Banco Galicia informarla como deudora en situación 5 (irrecuperable) ante el BCRA.

Sin perjuicio de la deducción previamente arribada, de la sentencia de fecha 29/06/2018 dictada en el juicio "Posse Silva Jimena María c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ Amparo Informativo" surge que en dicho proceso la demandada tampoco acreditó la veracidad de la deuda invocada, ni la relación contractual con la actora que habría dado origen a la supuesta deuda, por lo que la sentencia declaró injustificada la información en la Central de Deudores del BCRA, brindada por la demandada, respecto de la actora (situación 5) en el período de julio del 2017, condenando al Banco Galicia a rectificar la información brindada.

Así las cosas, conforme lo resuelto en el proceso antes mencionado, cuya sentencia definitiva se encuentra firme y consentida, entiendo acreditada la cuestión de hecho aquí analizada, resultando ilegítima, errada y/o falsa la calificación informada por la demandada a la Central de Deudores del Banco Central.

A mayor abundamiento, pese a la mayor amplitud probatoria que existe en el presente proceso, la demandada no aportó prueba en contrario que logre demostrar que la información brindada al BCRA respecto de la actora haya sido realizada de conformidad con la normativa vigente.

Al respecto, ha dicho nuestro Tribunal Superior que, *"Las decisiones judiciales deben basarse en pruebas concretas; para ello pesa sobre las partes la carga procesal, es decir practicar las diligencias necesarias para acreditar, desvirtuar y crear convicción suficiente, como apuntaba Sentis Merendo, los juicios se ganan o se pierden con la prueba, y el juez necesita de estos elementos de convicción que las partes deben aportar en el campo del principio dispositivo, y en referencia a esto es oportuno citar a Goldschmit, "la carga de la prueba", es un imperativo del propio interés..."*. C.C.F.y S. - Sala II, Sentencia N° 230, 22/05/2014.

En base a todo el análisis desarrollado en el presente punto, entiendo acreditado que el Banco Galicia cedió (como fiduciario) un crédito basado en una deuda inexistente a nombre de la actora, para el Fideicomiso Financiero Privado Frankel, provocando que dicha institución informe a la actora ante la Central de Deudores del BCRA como deudora en situación 5 por el período 05/2017; posteriormente aquella cesión que fue retrotraída en virtud de una cláusula dispuesta en el contrato de fideicomiso celebrado por la demandada y, al volver a ser, el Banco demandado, acreedor de la actora, éste procedió a informarla ante el BCRA como deudora en situación 5 por el período 07/2017 en octubre del mismo año, conforme informe que adjuntó.

d) Si como consecuencia del accionar del Banco Galicia, la actora sufrió algún daño. Al respecto, en primer lugar, tengo por acreditado que la actora inició una solicitud de crédito al Banco Nación la que no prosperó por haber observado, dicho banco, atrasos informados en el BCRA y Veraz, en virtud de los mails recibidos por la actora del Banco Nación donde se deja constancia de lo antedicho (emails de fecha 20/07/2017 y 25/07/2017), los que fueron constatados en el informe pericial de fecha 17/07/2020 y 23/07/2020 y que no fue impugnado. Además, se observan correos del Banco Galicia dirigidos a la actora (fechas 14/07/2017, 18/08/2017, 03/01/2018 y 06/03/2018) donde le informa a la actora que se encontraba gestionando sus reclamos; correspondencia que se encuentra corroborada como auténtica mediante el informe producido en la prueba pericial informática en fecha 17/07/2020 y 23/07/2020, que no fue impugnado por ninguna de las partes.

En relación al segundo intento de la actora de obtener el crédito, tengo a la vista la Resolución de "Acuerdo Previo - Préstamo Personal - Hipotecario para la Vivienda" emitida por el Banco Nación de fecha 14/09/2017, que da cuenta de los términos de un préstamo en relación al monto, tasa de interés, cuotas,

modalidad, etc. a favor de la actora; misma información se desprende del informe brindado por el Banco de la Nación Argentina en pág. 297/298.

En cuanto a la razón del rechazo la actora adjunta una captura pantalla del correo electrónico de fecha 22/12/2017 que le envió el Banco Nación (pág. 123 del primer cuerpo del expediente digitalizado) en virtud del cual le informa que no cumple con los requisitos necesarios para acceder al crédito solicitado. Si bien dicha captura pantalla no fue sometida a acreditación (como si se hizo con otros instrumentos en la prueba pericial informática producida en autos), lo cierto es que en virtud de la vasta actividad probatoria desplegada por la actora, dicha captura pantalla concuerda con el relato brindado y con los demás elementos probatorios acompañados; por ejemplo el remitente del mail de fecha 22/12/2017 es el mismo que el constatado pericialmente de fecha 20/07/2017. Además, la demandada no aportó pruebas a los fines de respaldar su postura o de hacer caer la de la demandada, solo se limitó a negar en virtud de un imperativo sustancial y procesal los hechos invocados por la actora, entre los cuales niega que la misma haya recibido dicho email; lo que no resulta suficiente para influir en el criterio del Sentenciante respecto a su legitimidad, y es por ello que considero prudente recibir dicha prueba como auténtica.

Habiéndose probado el hecho generador de daño, proveniente del accionar de la demandada, del breve examen realizado precedentemente, surge que la actora perdió la oportunidad de acceder a los créditos solicitados en diversas oportunidades como consecuencia de haberse encontrado informada en el BCRA y en el Veraz como deudora en situación 5 (irrecuperable), por lo que existe indudablemente un nexo adecuado de causalidad entre el informe negativo respecto a la capacidad crediticia de la actora en el BCRA, a instancia de la demandada, y la denegatoria del crédito hipotecario perseguido por la Sra. Posse Silva, por lo que aparece apropiado imputar la responsabilidad civil por aquellos daños al Banco Galicia demandado, más aún por cuanto la demandada no produjo prueba en contrario que permita desestimar los argumentos de la accionante en su contra.

Sobre ello, tiene dicho la jurisprudencia que, *“En materia probatoria, la reforma de la LDC por la ley 26.361 establece, en el art. 53, la carga de los proveedores de aportar al proceso todo los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Consideramos que se trata de la aplicación expresa en materia de relaciones de consumo del deber de conducta de las partes en el proceso. Cabe recordar, al respecto, que ambas partes tienen el deber de colaborar de buena fe en la aportación de las pruebas que se encuentren en su poder -o cuya producción les es relativamente sencilla-, que podrían conducir al juez a arribar al conocimiento de la verdad materia de los hechos debatidos en el proceso. . . , (Picasso-Vazquez Ferreyra - Ley de Defensa del Consumidor- comentada y anotada 96Tomo I - art.53 96 pag.664/665 96 La Ley). ...DRES.: BEJAS - IBAÑEZ - ACOSTA.” CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 - Nro. Expte: 3830/15 - Nro. Sent: 531- Fecha Sentencia 04/10/2019.*

Por todo lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la demanda instaurada en contra del Banco demandado.

6. Rubros. Determinada entonces la responsabilidad por parte de la accionada, incumbe a continuación analizar los rubros reclamados por la actora en autos.

En su demanda, la Sra. Posse Silva, reclama la indemnización por daños y perjuicios, los que se pueden discriminar de la siguiente manera: Por pérdida de chance la suma de \$5.124.938,52, por daño directo la suma de \$32.000, por daño moral la suma de \$400.000, por daño al proyecto de vida la suma de \$300.000 y por daño punitivo la suma de \$2.000.000.

6.1 Pérdida de chance: Sobre este rubro, la actora expresa que el mismo está representado por la imposibilidad de comprar, mediante crédito hipotecario, la vivienda propia. Así la actora persigue la suma de \$5.124.938,52, cuantía que explica en base a que el perjuicio sufrido está compuesto por tres partes:

a) Pérdida de valor de capacidad de compra del crédito frustrado respecto de la nueva calificación: Conforme lo descripto en el punto 1.2.a) de las resultas de la presente resolución, la actora reclama la suma de \$1.111.036,36 que según explica, surge de la diferencia entre las UVAs que representan el crédito aprobado en fecha 14/09/2017 por \$1.950.000 y del de fecha 03/08/2018 por \$1.600.000, conforme cotización del BCRA, es decir, 33.780,37 UVAs; y que según cotización al 01/03/2019 (fecha de cálculo) de

la mencionada institución, esa cantidad de UVAs equivale a la suma de \$1.111.036,36 reclamada.

Dicha información proporcionada por la actora resulta coincidente con el informe pericial presentado por el perito contador Romero Abaide en fecha 03/07/2020, el que, como ya se expresó, no fue rebatido.

Ahora bien, los montos de préstamos para vivienda procurados mediante las Resoluciones de Acuerdo Previo del Banco Nación a favor de la actora (14/09/2017 y 03/08/2018), que están reservadas en Caja Fuerte del Juzgado, conforme constancia de pág. 377, y en este acto tengo a la vista, resultan concordantes con lo manifestado por la actora.

Asimismo, el cálculo de las UVAs que representan cada préstamo, se debe realizar teniendo en cuenta el informe brindado por el BCRA, específicamente en pág. 111 del tercer cuerpo del expediente digitalizado, que determina la cotización de la Unidad de Valor Adquisitivo, conforme las opciones de menú de la página web del Banco central, allí indicadas (http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Cuadros_estandarizados_series_estadisticas.asp).

Efectuado el cálculo, conforme lo antes apuntado, tengo en cuenta que el mismo concuerda con la opción de la página Web del BCRA, propuesta por el actor en su escrito de pág. 211 del segundo cuerpo del expediente digitalizado ([http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp?serie=7913&detalle=Unidad%20con%20dos%20decimales-,%20base%2031.3.2016=14.05\)\)](http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp?serie=7913&detalle=Unidad%20con%20dos%20decimales-,%20base%2031.3.2016=14.05)))), el que resulta más sencillo de consultar y al que me remitiré a los fines del presente examen. Así, los UVAs que representan el valor de cada préstamo, a la fecha de cada Resolución de Preacuerdo, coinciden con lo expresado por la actora, en consecuencia, el préstamo de fecha 14/09/2017 equivalía a 97.500 UVAs y el del 03/08/2018 equivalía a 63.719,63 UVAs, existiendo una diferencia entre uno y otro de 33.780,37 UVAs, lo que equivale a la suma de \$1.111.036,36, tal como lo describió la actora, según la cotización del UVA del BCRA a la fecha en que efectuó el cálculo, esto es, el 01/03/2019.

Habiendo corroborado que el cálculo propuesto por la actora es correcto, y que además se encuentra respaldado por la pericial contable antes mencionada, cabe destacar que el primer preacuerdo obtenido por la actora en fecha 14/09/2017 no prosperó por hallarse informada como deudora en situación 5 (irrecuperable) por el Banco demandado ante la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina y Veraz; y que el segundo preacuerdo pactado con el Banco Nación en fecha 03/08/2018 ya no tenía las mismas condiciones que el anterior, configurándose de este modo un daño evidente a la actora que se traduce concretamente en la pérdida de una mejor o mayor asistencia financiera que perdió por no poder concretar el crédito ofrecido en el primer preacuerdo. Así es que considero que corresponde hacer lugar al presente rubro por la suma de \$1.111.036,36 en concepto de “pérdida de chance por pérdida de valor de capacidad de compra”, más el interés de la Tasa Activa del Banco Nación desde la fecha del cálculo realizado por la actora (01/03/2019).

b) Suba de precio de los inmuebles por la devaluación del peso argentino. Sobre este apartado, tengo a la vista el certificado de estudio de título emitido por la Escribana María C. Di Caro de Esteban (Registro N° 16), donde surge que, el 26/10/2017 a solicitud de la actora y para ser presentado ante el Banco Nación para un crédito para compra de inmueble, se llevó a cabo el estudio de título sobre el inmueble identificado como “Unidad Funcional N° 6” integrante del edificio sito en calle Lamadrid N° 308. En dicho estudio se describió el inmueble, sus medidas y su identificación catastral.

Por su parte la Inmobiliaria Lipriandi informa que, en pág. 245/246 del segundo cuerpo del expediente digital, el valor promedio del metro cuadrado para departamento ubicado en Barrio Sur de esta ciudad, para el mes de septiembre de 2017 es de \$23.000, para el mes de agosto de 2018 es de \$33.000 y para el mes de marzo de 2019 es de \$48.000.

De ambas pruebas ofrecidas surge que el inmueble cuyo estudio de título solicitó la actora, en miras a adquirirlo por medio del crédito hipotecario solicitado una Superficie Total Propia de 56,1696 m²; por lo que teniendo en cuenta la cotización del metro cuadrado antes mencionada, para el mes de septiembre del 2017 el valor promedio del inmueble es de \$1.291.900,8 (USD 74.736,82 en base a la cotización del dólar

del Banco Central de fecha 14/09/2017 obrante en autos), de \$1.853.596,8 para el mes de agosto del 2018 (U\$D 66.188,06 en base a la misma cotización antes mencionada al 03/08/2018) y de \$2.696.140,8 para marzo de 2019 (U\$D 67.737,12 en base a la cotización antes mencionada al 18/02/2019, fecha de redacción de la demanda).

Si bien los montos de suba de precios, descriptos por la actora en su escrito introductorio, son mayores a los montos calculados previamente, lo cierto es que los instrumentos aportados en el presente proceso me llevan a arribar a la conclusión del párrafo anterior. Y al respecto, era imprescindible acreditar cuantitativamente y cualitativamente el perjuicio por el que la accionante pretendía ser indemnizada y, en el caso de autos entiendo que la misma no logró respaldar documentalmente la proyección económica que describió en su escrito de demanda en relación a este rubro.

Así, no contando con la experticia de un profesional en la materia que aporte otros criterios y valoraciones cualitativas más específicas del inmueble en cuestión para establecer un valor comercial de plaza apropiado para cada período consultado, puesto que dicha prueba no fue ofrecida, no tengo por acreditado que el perjuicio invocado en éste apartado esté representado por el monto aquí reclamado, es decir la suma de \$ 3.172.500. Sin embargo no puedo apartarme de la realidad existente alrededor del mercado inmobiliario, de la constante suba de precios, la escalada del dólar, etc. Por lo que, en virtud de las atribuciones otorgadas al Suscripto, he de efectuar una prudente valoración del presente rubro, entendiendo que corresponde hacer lugar al mismo por la mitad del monto reclamado.

Tiene dicho la Jurisprudencia que, *“Es principio en la materia que cada parte debe probar los hechos en los que funda su pretensión, como imperativo de su propio interés. La sola comprobación de un hecho lesivo no basta para dar por cierto el perjuicio, que debe ser acreditado, toda vez que el daño hipotético o conjetural no es resarcible. La acreditación del perjuicio era inexcusablemente a cargo de la actora, a menos que surja in re ipsa de los mismos hechos; y la concerniente a la cuantía de aquéllos, un imperativo de su propio interés. Acerca de la prueba de la cuantía del daño, la solución legal está dada expresamente por la normativa contenida en el art. 267, CPCC, ya que la ley distingue la demostración de la existencia del daño, de su cuantificación: probado lo primero, es deber del órgano jurisdiccional establecer su monto conforme a las pruebas rendidas en la causa. Es oportuno recordar que la medida de la indemnización es una cuestión de magnitud, que debe relacionarse con la entidad del perjuicio reclamado según criterios de normalidad o habitualidad, de acuerdo a las circunstancias del caso que se resuelve. Si la actividad del interesado ha sido insuficiente para demostrar el valor del perjuicio sufrido, la norma citada proporciona una solución específica que consiste en la prudente valoración del tribunal, de la que ha hecho uso el Sr. Juez de grado. Cabe hacer notar que, en ausencia de prueba de sus concretas proyecciones económicas, el juicio presuncional habrá de responder a criterios de normalidad o habitualidad, de acuerdo a las circunstancias del caso que se resuelve. Así, a falta de prueba puntual del daño emergente, la demanda procederá por las sumas mínimas razonablemente necesarias para volver la situación de hecho a su estado anterior (arg. art. 1083 del Cód. Civil entonces vigente), según acontece en autos. Es criterio de esta Sala que la aplicación de la regla contenida en el art. 267 de la ley adjetiva no importa suplir la carga probatoria que pesaba sobre el actor, ni violación a las reglas que la rigen, porque según el curso natural y ordinario de las cosas, la reparación de los daños sufridos da lugar a gastos que deben ser soportados por el responsable de aquéllos. Bien que, a falta de prueba específica, el resarcimiento no podrá extenderse más allá de las consecuencias que se derivan según el curso natural y ordinario de las cosas; regla de causalidad receptada por nuestra ley civil (arg. art. 901, Cód. Civil; cc. CCCC, Sala I, sentencia del 05/9/2013, causa Zelaya; cc. sentencia del 28/11/2013, autos “Vencenovich; cc. sentencia del 31/03/2014, autos “Cheda). Una cosa es dar por cierta la existencia del daño, y otra muy distinta su cuantificación.- DRES.: AVILA (EN DISIDENCIA PARCIAL) - DAVID - RUIZ.” CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1 - Nro. Sent: 181 - Fecha Sentencia 12/05/2017.*

Recapitulando, pese a que, luego de analizar la prueba rendida, no surge acreditado el monto reclamado, entiendo que no puede negarse que el mercado inmobiliario crece continuamente fijando altos precios para las propiedades en venta, incluso, es de público conocimiento que el precio de las propiedades aumentan constantemente, más aún en la situación económica de nuestro país, resultando evidente que desde la fecha del primer preacuerdo de crédito hasta la fecha en que la actora pudo acceder a un nuevo preacuerdo, ya con condiciones menos beneficiosas que el anterior, la situación del mercado había cambiado, configurándose un perjuicio que surge in re ipsa, por lo que se encuentra justificada la procedencia del rubro pretendido, en virtud de lo dispuesto por el art. 267 de nuestro Código de forma.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al presente rubro por la suma de \$1.586.250 en concepto de “pérdida de chance por suba de precio de inmueble”, más el interés de la Tasa Activa del Banco Nación

desde la fecha del segundo preacuerdo (03/08/2018).

c) Agravamiento de la tasa de interés respecto del primer preacuerdo. A los fines de acreditar la procedencia del monto exigido en el presente apartado la actora ofreció prueba pericial contable, encontrándose agregado el informe pericial pertinente en fecha 03/07/2020.

Sobre este punto, en el apartado d) del informe pericial contable de fecha 03/07/2020, se expone que la diferencia de interés entre el crédito otorgado en el preacuerdo de fecha 14/09/2017 en relación al de fecha 03/08/2018 es de un 3%. Además el perito contador Romero Abaide, calcula la diferencia de costo financiero de ambos créditos (el del preacuerdo del 14/09/2017 y el del 03/08/2018) que en base al sistema francés establecido en ambos preacuerdos durante el plazo de amortización de 360 meses, efectuando dos cálculos diferentes: En el primer cálculo determina que la diferencia de costo financiero entre ambos es de \$848.418,11. En el segundo cálculo, expone que, a su criterio, la forma más adecuada de calcular la diferencia de costo financiero es, determinar el costo financiero del crédito de \$1.600.000 calculado con la tasa de interés del 6,5% y, a ese resultado restarle el costo financiero calculado en el mismo crédito pero con la tasa de interés del 3,5%, lo que arroja la suma de \$1.054.214,51.

En base al análisis desarrollado por el perito y las planillas anexas, entiendo que, la pericial contable constituye la opinión fundada de un experto acerca de los puntos sometidos a su dictamen, respecto de conocimientos de los que carece el Juez, es decir que se desempeña como un auxiliar del órgano jurisdiccional. Así, las conclusiones arribadas por el perito son las que permitirán verificar, o no, las afirmaciones de las partes en torno a un determinado tema; por lo que es tarea del mismo generar convicción en el juez sobre la cuestión sometida a análisis debiendo aplicar las reglas técnicas o científicas relativas a la materia que se consulta.

En el caso de autos, la pericial contable no fue objeto de impugnación o aclaratoria y, en base a las reglas de la sana crítica, entiendo que las conclusiones arribadas por el perito designado resultan acertadas y claramente explicadas, por lo que considero que tiene un gran valor probatorio. Por otra parte, tengo presente que, el perito, para calcular el monto del presente rubro efectúa dos cálculos diferentes, expresando que el más correcto es el segundo, sin embargo, el monto arribado en el primer cálculo (\$848.418,11) se asemeja más a la suma reclamada por la actora en el apartado C del rubro pérdida de chance del escrito de demanda, por lo que, atento a lo solicitado por la misma en el punto d.2) de pericial ofrecida, he de tomar el monto determinado en el primer cálculo efectuado por el auxiliar de justicia.

Esta conclusión resulta correcta ya que, el dictamen pericial no es imperativo ni obligatorio para el Sentenciante, quien puede apartarse del mismo ya sea total o parcialmente, si así lo considera, si existen suficientes razones que lo justifiquen.

Por todo lo expuesto considero que, corresponde hacer lugar al presente rubro por la suma de \$848.418,11 en concepto de “pérdida de chance por agravamiento de la tasa de interés respecto del primer preacuerdo”, con el interés de la Tasa Activa del Banco Nación desde la fecha del segundo preacuerdo (03/08/2018).

Para finalizar, tengo presente que el rubro de pérdida de chance, aquí analizado” esta desmembrado en partes atento a la complejidad del reclamo y a las diferentes aristas que componen el hecho de haber perdido la oportunidad de obtener un crédito hipotecario para compra de vivienda, en determinadas condiciones y en determinado momento, atento a la suba de precios, a la situación económica del país, a las fluctuaciones del mercado inmobiliario, etc., como se analizó en autos. En consecuencia considero prudente, hacer lugar al presente rubro, atento a las consideraciones previamente vertidas, por lo que corresponde condenar a la demandada a abonar a la actora la suma total de \$3.545,704,47 por pérdida de chance, monto que se encuentra integrado por las tres partes antes descriptas y analizadas, y cuyos intereses se deben calcular conforme lo establecido en cada una de ellas (apartados a, b y c)

6.2. Daño directo. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 40 bis de la Ley 24.240, el daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria,

ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

En el caso, la actora reclama la suma de \$32.000 en concepto de honorarios profesionales en virtud de que debió contratar los servicios profesionales de su letrado para iniciar los amparos informativos ya mencionados, conforme factura de fecha 11/04/2018 que fue adjuntada oportunamente por la accionante.

Sin embargo, del estudio de los procesos de amparo traídos a la vista, surge que la actora no fue condenada en costas. En el juicio “Posse Silva Jimena c/ Fideicomiso Financiero Frankel - Comafi Fiduciario Financiero SA s/ Hábeas Data” Expte. N° 024336/2017, la sentencia de fecha 22/05/2019 impuso las costas a la demandada, e igual resultado se obtuvo en el proceso “Posse Silva Jimena c/ Banco Galicia s/ Amparo Informativo” Expte. N° 131/18, mediante sentencia de fecha 29/06/2018. Entonces atento a que, las costas constituyen los gastos que el vencido en un pleito debe erogar como consecuencia del rechazo de una pretensión y en definitiva son la causa de la retribución debida a los profesionales en concepto de honorarios, el monto abonado en virtud de la Factura de fecha 11/04/2018 no debió ser costado por la actora, por no haber sido condenada en costas, no correspondiendo efectuar el reclamo de reintegro por dicho monto como daño directo en el presente proceso. En consecuencia, no cabe hacer lugar al rubro de daño directo, en virtud de las apreciaciones efectuadas y así lo considero.

6.3. Daño moral. Bustamante Alsina, define el daño moral como "la lesión a los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria" (Tratado General de la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, Bs.As. 1989, pág. 208).

Éste recae en el fuero íntimo de la personalidad, y al respecto es verdad que nadie puede indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar con certeza la existencia, y en su caso la intensidad, del padecimiento y angustia que se invoca. Asimismo la Jurisprudencia se ha manifestado en el sentido que: “Para que se configure el daño moral debe mediar una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas, perturbándose la tranquilidad y el ritmo normal de vida, por lo que representa una alteración desfavorable en las capacidades de una persona para sentir, querer y entender. Todo ello se traduce en un modo de estar diferente -y peor- de aquél en que se hallaba antes del hecho; el daño moral es el conjunto de sinsabores, angustias, pesares, sufrimientos, etc. que el hecho ilícito provocó en el damnificado (Zavala de González Matilde, “Resarcimiento de daños”, t.2 b, p.593 y ss.); son alteraciones emocionales profundas e íntimas y si bien es cierto que nadie puede indagar en el alma de otra persona con certeza y profundidad como aseverar la existencia, y en su caso, la intensidad de los padecimientos y angustias, éstos pueden ser presumidos o inferidos por el Juez de modo indirecto según el curso natural y ordinario de las cosas, conforme a las probanzas de los hechos y las circunstancias del caso”. Cámara Civil y Comercial Común - Sala 3, Sentencia N° 311 de fecha 27/05/2015.

Remitiéndonos al presente caso, pese a que la actora no ha ofrecido o producido pruebas a los fines de acreditar el daño que por el presente rubro se reclama, no cabe duda de que el comportamiento de la empresa accionada, seguramente generaron en el ánimo de la accionante, mortificaciones o alteraciones en su paz espiritual, lo cual debe ser reparado. Se trata de una prueba in re ipsa, pues el sufrimiento se deriva de los propios hechos, los cuales se encuentran debidamente acreditados.

Tiene dicho nuestra jurisprudencia que, *“El agravio moral, en casos como el de autos en donde una entidad financiera informa erróneamente un incumplimiento inexistente, consiste precisamente en esa conducta, ya que desde el mismo momento en que es provocada, afecta injustamente el honor y el buen nombre comercial de una persona, desde que tal comunicación aparece en el sistema (“Veraz”) con una condición patrimonial y financiera deficiente en forma indebida. Por lo tanto al rozar una esfera íntima de una persona inserta en un medio económico y social moderno inflinge daño patrimonial y moral desde el momento mismo de la comisión del acto ilícito. De allí que considero irreprochable el fallo en cuanto admite la procedencia del reclamo. DRES.: IBÁÑEZ - ACOSTA”* CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 - Nro. Sent: 363 Fecha Sentencia 29/07/2016.

A mayor abundamiento, tengo presente que el crédito que la actora no pudo obtener, fue perseguido a los fines de adquirir una vivienda donde establecer su hogar familiar junto con su hija María Justina Asfoura

(Acta de nacimiento pág. 307/311). En este sentido, es claro que la aflicción padecida por la actora es atendible puesto que, como lo ha dicho doctrina y jurisprudencia respecto de la cuestión, “la vivienda familiar es la sede de la intimidad más sensible que nuestra cultura nos ha impuesto, ya que hasta el ordenamiento jurídico protege no sólo la salud física sino particularmente la seguridad espiritual que el hogar significa” (cfr. Revista de Derecho de Daños, T. 6, Daño Moral, pág. 391). Y es de destacar que, se encuentra probado en autos que la accionante carece de bienes inmuebles a su nombre en virtud del informe del Registro Inmobiliario (pág. 217/222 del segundo cuerpo digitalizado) y que debe alquilar un inmueble con fines de vivienda conforme la documental aportada al inicio de la presente acción y que en este acto tengo a la vista.

En consecuencia, atento a lo considerado, considero prudente hacer lugar la presente rubro, condenando a la demandada a abonar a la actora la suma de \$400.000 en concepto de daño moral, con el interés de la Tasa Activa del Banco Nación desde la fecha de la presente sentencia y hasta el efectivo pago.

6.4 Daño al proyecto de vida. Sobre este rubro la actora manifiesta que no debe confundirse con el daño moral puesto que más bien se vincula con el hecho de haber perdido, para siempre, la posibilidad de acceder a una vivienda propia.

A criterio del suscripto, dicha interpretación es incorrecta, y ello por cuanto el daño moral, por ejemplo, aprehende las interferencias al proyecto de vida, es decir, que no es un rubro autónomo.

Resulta interesante el criterio de nuestro Tribunal Superior que a continuación comparto: *“Respecto del daño al proyecto de vida, cabe entender que tal concepto (proyecto de vida) implica que, como lo ha enseñado la filosofía en el S. XX -Ortega y Gasset- vivir es constantemente lo que vamos a ser, decidir qué vamos a ser, decidir nuestro futuro. La vida es ante todo toparse con el futuro, en donde paradójicamente no es el pasado y ni siquiera el presente lo que vivimos, sino que la vida es una actividad que se ejecuta hacia adelante; la vida es puro futuro, lo que aún no es y en donde en ese futuro cobra gran relevancia el azar. Ahora bien, dado que vivir es vivir hacia el futuro, siempre estamos realizando un proyecto de vida hacia ese futuro que aún no llegó; para vivir hay que proyectar cómo vivir y adoptar decisiones vitales en todo momento, lo que a su vez presupone un ejercicio de libertad íntima pero que exige ser cumplida en la vida de relación. Por eso en el proyecto de vida de toda persona se juega su futuro y se centran sus más caras aspiraciones haciendo realidad el ejercicio de libertad, ser una cosa o no serla, querer algo o no quererlo; de allí que todo evento que frustre esa libertad interior inherente a la persona y a la vida del modo en que se quiere que sea vivida, incide en lo esencial del ser; es un daño radical porque la frustración al proyecto de vida genera un vacío existencial (Fernández Sessarego, “El daño a la libertad fenoménica o daño al proyecto de vida”, Rev. Resp. Civ. y Seg., 2009-IX-3). Sin embargo, tampoco este concepto posee autonomía resarcitoria distinta de los conceptos tradicionales arriba señalados - moral y material -. En ese sentido se ha señalado que la lesión que coarta o limita proyectos vitales no debe situarse como categoría diferente de los daños tradicionales, sino que deberá ser indemnizada en la órbita del daño moral o del daño material o en ambas como ocurre generalmente con las incapacidades (Cf., Zavala de González, Matilde, “Daño a proyectos de vida”, La Ley 2005-D, 986, Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo II, 1271).- DRES.: ACOSTA - BEJAS.” CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 - Nro. Sent: 311 - Fecha Sentencia 27/05/2015.*

Así siendo que el presente reclamo, no es autónomo y se encuentra comprendido y reconocido tanto en el rubro de pérdida de chance como en el de daño moral (conforme lo expresado en los puntos 6.1 y 6.3 de éstos considerandos), no corresponde hacer lugar al mismo.

6.5 Daño punitivo. La ley de defensa del consumidor lo define en su artículo 52 bis.

Los daños punitivos han sido definidos como "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro" (Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, p. 453, Hammurabi, Bs.As., 1996.).

Se ha utilizado con más corrección la denominación "Daños ejemplares" para destacar la característica de que se originaron para constituir un castigo ejemplificador para determinados incumplimientos especialmente dañinos. La designación "daños punitivos" (punitivo: del latín pun-tum, supino de pun-re, castigar) puede ser incorrecta desde el punto de vista semántico, ya que lo que se sanciona no es el daño en sí mismo sino en todo caso la conducta del dañador. Sin embargo ese nombre ha sido ya adoptado con aceptable consenso y, en el ámbito jurídico cuanto menos, se sabe a ciencia cierta a que nos referimos al

emplear dicha denominación.

Sin perjuicio de lo ante dicho, a entender del Sentenciante el término que considero más adecuado es el de “sanción pecuniaria disuasiva” porque es justamente ese el objetivo principal de la misma, es decir, modificar la conducta del dañador con una sanción pecuniaria a fin de que se estimule al proveedor para obrar de un modo más diligente.

Ahora bien, nuestra jurisprudencia entiende que, *“no basta con el mero incumplimiento legal o contractual para que sean aplicables los daños punitivos o multa civil por actos desaprensivos, sino que se requiere además la concurrencia de otros requisitos objetivos y subjetivos. Desde el punto de vista objetivo, para la aplicación de la multa civil prevista por el art. 52 bis no basta un simple daño, sino que debe tratarse de un daño -o su posibilidad- que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional exija una sanción ejemplar. Jorge Mario Galdós, antes de la introducción de los "daños punitivos" en nuestro derecho positivo, ya ilustraba el vasto espectro de situaciones en las que resulta útil su aplicación con los siguientes ejemplos: accidentes de tránsito, afectación de los derechos del consumidor, daños ambientales, lesión de bienes públicos colectivos, piratería intelectual, difamación por la prensa, publicidad engañosa, intromisión en la intimidad o privacidad e injurias, afectación de intereses pluriindividuales homogéneos y compartidos, supresión de beneficios obtenidos ilegítimamente, microilícitos -en los que, por su escaso monto, es improbable que el afectado demande-, etcétera (cfr. GALDÓS, Jorge Mario, Los daños punitivos. Su recepción en el Código Civil de 1998. Primeras aproximaciones, RCyS, 1999-23). Desde el punto de vista subjetivo, la conducta del proveedor debe ser dolosamente indignante, recalcitrante, desaprensiva o antisocial. Para la concepción dominante en el derecho angloamericano, no cualquier acto ilícito puede generar la aplicación de punitive damages, sino que se requiere una particular subjetividad en la conducta del dañador (outrageous conduct) que va más allá de la mera negligencia (Cfr. PIZARRO, Ramón Daniel, Daño moral, p. 529, Hammurabi, Buenos Aires, 2004). El art. 1587 del Proyecto de 1998 habla de "grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva" (cfr. MOISÁ, Benjamín, Los llamados "daños punitivos"...).- DRES.: LEONE CERVERA - MOISA." Nro. Sent: 419 - Fecha Sentencia 28/09/2015.*

En el caso de autos se advierte una conducta absolutamente reprochable por parte de la demandada que dejó a la actora en una situación de completa incertidumbre, atento a que la incluyó en un vínculo de consumo del que ella no tuvo conocimiento sino hasta que se enteró de que se encontraba informada como deudora irrecuperable ante el Banco Central de la República Argentina y el Veraz, y digo “vínculo de consumo” en vez de “relación de consumo” puesto que, como ya expresé, se acreditó en autos que no existió voluntad/consentimiento por parte de la accionante en iniciar una relación de consumo con la demandada, y aun así el Banco demandado la involucró en un “contrato de apertura de paquete de servicios”, emitiendo resúmenes a su nombre con cargos que la misma no había generado.

Por su parte, ante el reclamo efectuado por la actora, la demandada extendió una nota de inexistencia de deuda, de fecha 18/07/2017, y aun así informó a la misma como deudora en situación 5 ante el BCRA; ello, a sabiendas de que dicha información frustraría el acceso de la demandante al crédito hipotecario puesto que, aquella, se lo hizo saber mediante carta documento de fecha 02/08/2017, que consta en autos.

Inclusive, en virtud de un contrato de fideicomiso, cedió la “deuda” de la actora al Fideicomiso FF Privado Frankel, retrotrayendo dicho crédito posteriormente, generando gran incertidumbre respecto a quien acudir a los fines de rectificar tal información. Esta operatoria, antes mencionada, se infiere también de la captura pantalla del informe del BCRA que adjunta la actora en su escrito inicial (específicamente en pág. 165) donde se observa que la demandada buscaría “desprenderse” de sus acreencias supuestamente incobrables (situación 5) que no le resultaría conveniente reflejar en su balance .

Además, la demandada, al contestar demanda, manifestó que la actora había olvidado que había contratado con ella el mencionado paquete de servicios, incumpliendo los pagos a su cargo, pero tampoco acompañó ninguna documentación que permitiera probar dicha situación, es más ante la intimación de incorporar la documental a tal fin, la misma guardó silencio.

Teniendo en cuenta que las empresas demandadas cuentan con los medios para dilucidar como se suscitaron los hechos, el hecho de haberse limitado a negar su responsabilidad y clamar la de la actora, sin ofrecer ni producir pruebas al respecto, demuestra una actitud reticente que, además de las constancias de autos y de las presunciones que por ley favorecen a los consumidores y usuarios, entiendo que hacen procedente la recepción positiva del presente rubro reclamado.

Por otro lado, se encuentra perfectamente acreditado en las causas de amparo informativo que existió comportamiento profesional reprochable de la demandada en relación a la actora, agravada por la circunstancia de que teniendo la información necesaria para enmendar su error, lejos de asumir la responsabilidad lo profundizó al desentenderse de responsabilidad, no aportando prueba alguna que explique su accionar, justificando ello en el estrecho marco probatorio de dichos procesos, y aun así tampoco produjo las pruebas pertinentes en el presente proceso, demostrando una actitud negligente y temeraria, en perjuicio de la actora, quien si consentir su participación en la relación de consumo unilateralmente creada por la demandada, se vio absolutamente perjudicada por la misma.

Finalmente, respecto del quantum de la sanción la ley de defensa del consumidor contiene dos precisiones al respecto. La graduación de la multa se establecerá en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, lo que impone una evaluación integral del contexto en que se produce la conducta sancionada; a su vez, el máximo de la multa se correlaciona con el art. 47 inc. b) para las sanciones pecuniarias impuestas en sede administrativa. En definitiva esta legislación confiere al Sentenciante la facultad de imponer la multa civil en favor del damnificado, que se graduará en función de la gravedad del hecho y circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. En tal orden de ideas la gravedad de la falta debe ser apreciada teniendo en consideración las circunstancias del caso, por ejemplo el tipo de producto con el que se comercia, o el servicio prestado, el tipo de consumo, a quien está destinado, la cantidad, etc. Es por ello que queda librada a la apreciación judicial, puesto que no se puede establecer reglas fijas al respecto. Por otra parte, la amplitud que tiene el juez para determinar dicha multa, permitirá adecuar la solución a las circunstancias del caso.

En función de todo ello, entiendo que se encuentran cumplidos los presupuestos señalados anteriormente, por esta razón corresponde hacer lugar al rubro daño punitivo reclamado, y en efecto establecer una sanción pecuniaria disuasiva a favor de la actora. En consecuencia se condena a la entidad bancaria demandada a abonar a la Sra. Posse Silva la suma de \$1.000.000, con más los intereses de la Tasa Activa del Banco Nación desde la fecha de la presente resolución hasta su total y efectivo pago. Ello por cuanto es sabido que la sanción pecuniaria disuasiva que aquí se aplica recién nace con la presente resolución judicial que la impone, por lo que los intereses moratorios deben correr desde la sentencia definitiva que en este acto se dicta.

7. Intereses. Respecto de los intereses se aplicará la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, conforme a la jurisprudencia establecida in re "Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" (Cfr. CCCTuc., Sala II, Sentencia del 22/06/12 y "Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. C/Astorga, Ceferino Alfonso S/Cobro de Pesos", Sentencia del 30/04/2013; desde la fecha mencionada en cada rubro analizado y hasta su total y efectivo pago.

8. Costas. En cuanto a las costas, y siguiendo el principio establecido por el art. 105 del CPCCT, las mismas se imponen a la demandada vencida.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O

I. NO HACER LUGAR, a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada Banco de Galicia y Buenos Aires SA, por intermedio de su letrado apoderado, de acuerdo a las consideraciones precedentes.

II. COSTAS, como se consideran.

III. NO HACER LUGAR, a la inconstitucionalidad planteada, en contra del art. 52 bis de la Ley 24.240, por la demandada Banco de Galicia y Buenos Aires SA, por intermedio de su letrado apoderado, conforme lo considerado.

IV. COSTAS, como se consideran.

V. HACER LUGAR, a la demanda de interpuesta por Jimena Posse Silva, DNI N° 28.681.915, en contra de Banco de Galicia y Buenos Aires SA. En consecuencia, condénese a ésta última a abonar a Jimena Posse Silva, DNI N° 28.681.915 la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$4.546.104,47) devengando a dicha suma el interés calculado, para cada rubro, conforme lo considerado, todo ello en el término de diez días de notificada la misma.

VI. COSTAS, como se consideran.

VII. RESERVAR, pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER

DR. PEDRO D. CAGNA

JUEZ CIVIL Y COMERCIAL. Vta NOMINACIÓN

Firmado digitalmente por:
CN=CAGNA Pedro Daniel
C=AR
SERIALNUMBER=CUIL 20181873966

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.



**Colegio de Abogados
de Tucumán**

F.AI.01

**Actualización de
Importes**

San Miguel de Tucumán, 21 de Noviembre de 2022

FECHAS

Fecha Inicial:

03 de Agosto de 2018

Fecha Final:

31 de Octubre de 2022

FORMULA

03/08/18 - 31/08/18 => 3.3080 x 0,94	3,09%
01/09/18 - 30/09/18 => 3.8032 x 1	3,80%
01/10/18 - 31/10/18 => 4.6285 x 1	4,63%
01/11/18 - 30/11/18 => 6.2646 x 1	6,26%
01/12/18 - 31/12/18 => 5.0471 x 1	5,05%
01/01/19 - 31/01/19 => 4.6046 x 1	4,60%
01/02/19 - 28/02/19 => 3.9149 x 1	3,91%
01/03/19 - 31/03/19 => 3.8943 x 1	3,89%
01/04/19 - 30/04/19 => 4.6488 x 1	4,65%
01/05/19 - 31/05/19 => 5.1020 x 1	5,10%
01/06/19 - 30/06/19 => 5.1421 x 1	5,14%
01/07/19 - 31/07/19 => 4.7540 x 1	4,75%
01/08/19 - 31/08/19 => 5.2419 x 1	5,24%
01/09/19 - 30/09/19 => 5.8858 x 1	5,89%
01/10/19 - 31/10/19 => 5.6431 x 1	5,64%
01/11/19 - 30/11/19 => 4.7082 x 1	4,71%
01/12/19 - 31/12/19 => 4.2272 x 1	4,23%
01/01/20 - 31/01/20 => 3.7247 x 1	3,72%
01/02/20 - 29/02/20 => 3.3758 x 1	3,38%
01/03/20 - 31/03/20 => 2.9899 x 1	2,99%
01/04/20 - 30/04/20 => 2.2855 x 1	2,29%
01/05/20 - 31/05/20 => 2.0752 x 1	2,08%
01/06/20 - 30/06/20 => 2.8417 x 1	2,84%
01/07/20 - 31/07/20 => 2.9179 x 1	2,92%
01/08/20 - 31/08/20 => 2.9140 x 1	2,91%
01/09/20 - 30/09/20 => 2.9323 x 1	2,93%
01/10/20 - 31/10/20 => 2.9814 x 1	2,98%
01/11/20 - 30/11/20 => 3.2013 x 1	3,20%
01/12/20 - 31/12/20 => 3.3809 x 1	3,38%
01/01/21 - 31/01/21 => 3.3706 x 1	3,37%
01/02/21 - 28/02/21 => 3.3604 x 1	3,36%
01/03/21 - 31/03/21 => 3.3565 x 1	3,36%
01/04/21 - 30/04/21 => 3.3623 x 1	3,36%
01/05/21 - 31/05/21 => 3.3630 x 1	3,36%
01/06/21 - 30/06/21 => 3.3620 x 1	3,36%
01/07/21 - 31/07/21 => 3.3644 x 1	3,36%
01/08/21 - 31/08/21 => 3.3682 x 1	3,37%

01/09/21 - 30/09/21 => 3.3672 x 1	3,37%
01/10/21 - 31/10/21 => 3.3684 x 1	3,37%
01/11/21 - 30/11/21 => 3.3694 x 1	3,37%
01/12/21 - 31/12/21 => 3.3698 x 1	3,37%
01/01/22 - 31/01/22 => 3.5628 x 1	3,56%
01/02/22 - 28/02/22 => 3.7394 x 1	3,74%
01/03/22 - 31/03/22 => 3.9472 x 1	3,95%
01/04/22 - 30/04/22 => 4.1873 x 1	4,19%
01/05/22 - 31/05/22 => 4.4446 x 1	4,44%
01/06/22 - 30/06/22 => 4.6156 x 1	4,62%
01/07/22 - 31/07/22 => 4.8515 x 1	4,85%
01/08/22 - 31/08/22 => 5.6178 x 1	5,62%
01/09/22 - 30/09/22 => 6.4074 x 1	6,41%
01/10/22 - 31/10/22 => 6.5881 x 1	6,59%
TOTAL	204,57%

RESULTADOS

Importe original:	\$ 848.418,11
Porcentaje de actualización:	204,57 %
Intereses acumulados:	\$ 1.735.603,67
Importe actualizado:	\$ 2.584.021,78

Aclaración: La presente actualización está sujeta a revisión y contralor por parte del peticionante, de modo que no es apta para ser presentada administrativa o judicialmente.



**Colegio de Abogados
de Tucumán**

F.AI.01

**Actualización de
Importes**

San Miguel de Tucumán, 21 de Noviembre de 2022

FECHAS

Fecha Inicial:

03 de Agosto de 2018

Fecha Final:

31 de Octubre de 2022

FORMULA

03/08/18 - 31/08/18 => 3.3080 x 0,94	3,09%
01/09/18 - 30/09/18 => 3.8032 x 1	3,80%
01/10/18 - 31/10/18 => 4.6285 x 1	4,63%
01/11/18 - 30/11/18 => 6.2646 x 1	6,26%
01/12/18 - 31/12/18 => 5.0471 x 1	5,05%
01/01/19 - 31/01/19 => 4.6046 x 1	4,60%
01/02/19 - 28/02/19 => 3.9149 x 1	3,91%
01/03/19 - 31/03/19 => 3.8943 x 1	3,89%
01/04/19 - 30/04/19 => 4.6488 x 1	4,65%
01/05/19 - 31/05/19 => 5.1020 x 1	5,10%
01/06/19 - 30/06/19 => 5.1421 x 1	5,14%
01/07/19 - 31/07/19 => 4.7540 x 1	4,75%
01/08/19 - 31/08/19 => 5.2419 x 1	5,24%
01/09/19 - 30/09/19 => 5.8858 x 1	5,89%
01/10/19 - 31/10/19 => 5.6431 x 1	5,64%
01/11/19 - 30/11/19 => 4.7082 x 1	4,71%
01/12/19 - 31/12/19 => 4.2272 x 1	4,23%
01/01/20 - 31/01/20 => 3.7247 x 1	3,72%
01/02/20 - 29/02/20 => 3.3758 x 1	3,38%
01/03/20 - 31/03/20 => 2.9899 x 1	2,99%
01/04/20 - 30/04/20 => 2.2855 x 1	2,29%
01/05/20 - 31/05/20 => 2.0752 x 1	2,08%
01/06/20 - 30/06/20 => 2.8417 x 1	2,84%
01/07/20 - 31/07/20 => 2.9179 x 1	2,92%
01/08/20 - 31/08/20 => 2.9140 x 1	2,91%
01/09/20 - 30/09/20 => 2.9323 x 1	2,93%
01/10/20 - 31/10/20 => 2.9814 x 1	2,98%
01/11/20 - 30/11/20 => 3.2013 x 1	3,20%
01/12/20 - 31/12/20 => 3.3809 x 1	3,38%
01/01/21 - 31/01/21 => 3.3706 x 1	3,37%
01/02/21 - 28/02/21 => 3.3604 x 1	3,36%
01/03/21 - 31/03/21 => 3.3565 x 1	3,36%
01/04/21 - 30/04/21 => 3.3623 x 1	3,36%
01/05/21 - 31/05/21 => 3.3630 x 1	3,36%
01/06/21 - 30/06/21 => 3.3620 x 1	3,36%
01/07/21 - 31/07/21 => 3.3644 x 1	3,36%
01/08/21 - 31/08/21 => 3.3682 x 1	3,37%

01/09/21 - 30/09/21 => 3.3672 x 1	3,37%
01/10/21 - 31/10/21 => 3.3684 x 1	3,37%
01/11/21 - 30/11/21 => 3.3694 x 1	3,37%
01/12/21 - 31/12/21 => 3.3698 x 1	3,37%
01/01/22 - 31/01/22 => 3.5628 x 1	3,56%
01/02/22 - 28/02/22 => 3.7394 x 1	3,74%
01/03/22 - 31/03/22 => 3.9472 x 1	3,95%
01/04/22 - 30/04/22 => 4.1873 x 1	4,19%
01/05/22 - 31/05/22 => 4.4446 x 1	4,44%
01/06/22 - 30/06/22 => 4.6156 x 1	4,62%
01/07/22 - 31/07/22 => 4.8515 x 1	4,85%
01/08/22 - 31/08/22 => 5.6178 x 1	5,62%
01/09/22 - 30/09/22 => 6.4074 x 1	6,41%
01/10/22 - 31/10/22 => 6.5881 x 1	6,59%
TOTAL	204,57%

RESULTADOS

Importe original:	\$ 1.586.250,00
Porcentaje de actualización:	204,57 %
Intereses acumulados:	\$ 3.244.981,80
Importe actualizado:	\$ 4.831.231,80

Aclaración: La presente actualización está sujeta a revisión y contralor por parte del peticionante, de modo que no es apta para ser presentada administrativa o judicialmente.



**Colegio de Abogados
de Tucumán**

F.AI.01

**Actualización de
Importes**

San Miguel de Tucumán, 21 de Noviembre de 2022

FECHAS

Fecha Inicial:

01 de Marzo de 2019

Fecha Final:

31 de Octubre de 2022

FORMULA

01/03/19 - 31/03/19 =>	3.8943 x 1	3,89%
01/04/19 - 30/04/19 =>	4.6488 x 1	4,65%
01/05/19 - 31/05/19 =>	5.1020 x 1	5,10%
01/06/19 - 30/06/19 =>	5.1421 x 1	5,14%
01/07/19 - 31/07/19 =>	4.7540 x 1	4,75%
01/08/19 - 31/08/19 =>	5.2419 x 1	5,24%
01/09/19 - 30/09/19 =>	5.8858 x 1	5,89%
01/10/19 - 31/10/19 =>	5.6431 x 1	5,64%
01/11/19 - 30/11/19 =>	4.7082 x 1	4,71%
01/12/19 - 31/12/19 =>	4.2272 x 1	4,23%
01/01/20 - 31/01/20 =>	3.7247 x 1	3,72%
01/02/20 - 29/02/20 =>	3.3758 x 1	3,38%
01/03/20 - 31/03/20 =>	2.9899 x 1	2,99%
01/04/20 - 30/04/20 =>	2.2855 x 1	2,29%
01/05/20 - 31/05/20 =>	2.0752 x 1	2,08%
01/06/20 - 30/06/20 =>	2.8417 x 1	2,84%
01/07/20 - 31/07/20 =>	2.9179 x 1	2,92%
01/08/20 - 31/08/20 =>	2.9140 x 1	2,91%
01/09/20 - 30/09/20 =>	2.9323 x 1	2,93%
01/10/20 - 31/10/20 =>	2.9814 x 1	2,98%
01/11/20 - 30/11/20 =>	3.2013 x 1	3,20%
01/12/20 - 31/12/20 =>	3.3809 x 1	3,38%
01/01/21 - 31/01/21 =>	3.3706 x 1	3,37%
01/02/21 - 28/02/21 =>	3.3604 x 1	3,36%
01/03/21 - 31/03/21 =>	3.3565 x 1	3,36%
01/04/21 - 30/04/21 =>	3.3623 x 1	3,36%
01/05/21 - 31/05/21 =>	3.3630 x 1	3,36%
01/06/21 - 30/06/21 =>	3.3620 x 1	3,36%
01/07/21 - 31/07/21 =>	3.3644 x 1	3,36%
01/08/21 - 31/08/21 =>	3.3682 x 1	3,37%
01/09/21 - 30/09/21 =>	3.3672 x 1	3,37%
01/10/21 - 31/10/21 =>	3.3684 x 1	3,37%
01/11/21 - 30/11/21 =>	3.3694 x 1	3,37%
01/12/21 - 31/12/21 =>	3.3698 x 1	3,37%
01/01/22 - 31/01/22 =>	3.5628 x 1	3,56%
01/02/22 - 28/02/22 =>	3.7394 x 1	3,74%
01/03/22 - 31/03/22 =>	3.9472 x 1	3,95%

01/04/22 - 30/04/22 => 4.1873 x 1	4,19%
01/05/22 - 31/05/22 => 4.4446 x 1	4,44%
01/06/22 - 30/06/22 => 4.6156 x 1	4,62%
01/07/22 - 31/07/22 => 4.8515 x 1	4,85%
01/08/22 - 31/08/22 => 5.6178 x 1	5,62%
01/09/22 - 30/09/22 => 6.4074 x 1	6,41%
01/10/22 - 31/10/22 => 6.5881 x 1	6,59%
TOTAL	173,21%

RESULTADOS

Importe original:	\$ 1.111.036,36
Porcentaje de actualización:	173,21 %
Intereses acumulados:	\$ 1.924.447,19
Importe actualizado:	\$ 3.035.483,55

Aclaración: La presente actualización está sujeta a revisión y contralor por parte del peticionante, de modo que no es apta para ser presentada administrativa o judicialmente.